

N.º 413
10 de marzo
de 2026
Apoyo:
1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrera.org
www.informacionobrera.org

Presupuesto de guerra o escuelas y hospitales



EDITORIAL

¡NO A LA GUERRA! Hospitales y no misiles

El presidente Pedro Sánchez declaró oficialmente el miércoles 4 de marzo que España no admitía la utilización de las bases de Morón y Rota para atacar a Irán Los Estados Unidos, que habían mantenido un importante tránsito de aviones por Morón, retiraron varios aviones cisterna de esa base y los trasladaron a otras bases en Europa, y Trump amenazó con represalias comerciales contra España. Sánchez resumió la situación en cuatro palabras: NO A LA GUERRA, y fue más preciso: o misiles u hospitales.

Todo trabajador, joven, todo ciudadano de bien, no puede sino aplaudir esta decisión. Son muchos los que han recordado cómo hace 23 años Aznar nos hizo entrar en la guerra contra Iraq, y sus consecuencias. Y los que muestran su indignación y repugnancia ante asesinatos como el de las 185 niñas de la escuela de la ciudad iraní de Minab.

El mismo miércoles por la tarde, el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que España había cambiado de opinión, y que estaba dispuesta a colaborar militarmente con el ejército norteamericano. Cinco minutos después, el ministro Albares desmintió la burda maniobra y reafirmó la decisión del Gobierno.

Vivimos estos días al calor de la brutal intervención militar contra el pueblo iraní, en nombre de una supuesta democracia a implantar en el país a bombazos. «Democracia» que resumen las palabras de Trump, que ha dicho que debe ser él quien elija al nuevo «líder supremo» de Irán. Al mismo tiempo, se ha multiplicado la polarización extrema del enfrentamiento político en nuestro país. Las derechas «patriotas» no han dudado en alinearse con Trump y su política destructiva, mostrando su sumisión completa al imperialismo, en línea con la posición de la Monarquía y las instituciones heredadas del franquismo. Desde el apoyo a esta decisión del Gobierno, compartimos la clara posición de PODEMOS y sus dirigentes, como Ione Belarra, que plantea la necesidad de cerrar las bases, o Pablo Iglesias, que plantea que salgan de España los 8.000 soldados norteamericanos.

Resaltamos también la intervención parlamentaria del diputado republicano catalán Jordi Salvador. Ha señalado la ocultación del gasto militar real, de 94.000 millones, lo que señala que hay que hacer realidad la elección entre misiles u hospitales, porque no son compatibles.

Esas tomas de posición expresan el sentimiento de la mayoría de nuestros pueblos, de los trabajadores, como los cientos de sindicalistas y electos de todas las corrientes que se declaran por la democracia y los derechos de los pueblos y que apoyan la Conferencia y Mitin internacionales contra la guerra en Londres de los próximos 19 y 20 de junio.

Misiles u Hospitales: la defensa de las reivindicaciones, de los salarios, las pensiones, la vivienda social, la sanidad y la educación públicas tiene una relación ineludible con la lucha contra la guerra, contra los presupuestos de guerra.

Campaña mitin contra la guerra del 20 de junio en Londres

páginas 6 y 7

Sanidad: Derogación real de la Ley 15/97

página 4



Contra la Ley Mordaza

página 3



Día 14 de marzo: jornada continental por el derecho a migrar en las Américas
página 10



El imperialismo es la guerra

página 12



La financiación autonómica

Las actuales discusiones sobre la financiación territorial arrancan del acuerdo de hace un año entre ERC y el PSC-PSOE. Estaban de acuerdo en que la financiación autonómica había arruinado a Cataluña y, para superar esa situación, proponían que Cataluña recaudase todos los impuestos y cargas, entregando al Gobierno central la cantidad que solidariamente le correspondiese (a diferencia del cupo vasco). Sobre la base de este acuerdo, Salvador Illa fue elegido presidente catalán.

¿Cómo y por qué el sistema autonómico arruina a los pueblos? Los entes autonómicos no están en el origen de la lucha por servicios públicos que los pueblos conquistaron tras la muerte del dictador. Aparecen después, y gracias a ellos el Estado distribuye con arbitrariedad, como en el franquismo. Y así crea agravios, tiende a enfrentar a los pueblos.

Al haber aprobado el Comité Federal del PSOE el pacto ERC-PSC/PSOE, parecía lógico que el PSOE planteara a todos los pueblos que el Estado autonómico les había arruinado. Parecía lógico que les propusiera que los pueblos recaudaran todos los impuestos. Pero no fue así, tras semanas de silencio de la vicepresidenta Montero, el Gobierno guardó en un cajón el acuerdo y defendió el sistema autonómico dejando lo de Cataluña a un lado como un problema singular (a recortar, como ahora se ve).

Esto ha creado una situación vivida. Hoy la ministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia andaluza anuncia un nuevo plan autonómico, basado en que el Estado recauda los impuestos, en particular

el IRPF, asociando a representantes de las autonomías. A estas alturas, el engaño no cuela.

A la vez, anuncia que va a repartir fondos a las comunidades autónomas, que no tendrán que ver con los Presupuestos. Es la dislocación de las finanzas del Estado.

Al mismo tiempo, el presidente catalán Illa tiene que responder a quienes le piden unos presupuestos basados en sus acuerdos de hace un año, en particular a ERC que exige que la hacienda catalana recaude el IRPF, que es el mayor impuesto. Illa ha sido tajante... tiene un compromiso total con que Cataluña recaude el IRPF e impulsará los acuerdos parlamentarios para que así sea. Tampoco cuela, porque cada día Montero repite que no a la recaudación del IRPF, el gran impuesto, por los pueblos.

Esto es más dislocación del Estado. ¿Va a votar el PSOE el plan de Montero y el de Illa?

No es una discusión en que los dos tienen razón. Tiene razón Esquerra: habría que empezar porque el PSOE reconozca con todas las consecuencias el acuerdo de hace un año, que de manera progresiva los pueblos recaudan. Porque solo la intervención de los pueblos abre otro camino democrático. Y lo demás son parches desordenados a una distribución falsamente unitaria de origen franquista que arruina a los pueblos.

Toda lucha de los pueblos por una recaudación democrática de impuestos forma parte esencial de la lucha por instituciones democráticas que gobiernen.

Manuel Cuso

¿Quién alimenta a la ultraderecha?

Artículo de opinión

Se multiplican los llamamientos a la unidad y las propuestas electorales en las que se nos llama a «combatir a la ultraderecha». La mayoría de esas propuestas se justifican por cálculos basados en las leyes electorales de la Monarquía. Leyes que incluyen el reparto provincial de escaños (que penaliza



seriamente a las opciones con menor porcentaje de votos), y el límite del 5% para obtener representación.

Más allá de esos cálculos, habría falta preguntarse no solo cómo vencer a la ultraderecha en las urnas, sino cómo hacer frente a su crecimiento entre sectores de la juventud y de la población trabajadora.

Partamos de un hecho: hay una enorme distancia entre el relato triunfalista sobre los logros del «Gobierno progresista» —a quien apoyan la mayoría de quienes ha-

cen esas propuestas de «unidad»— y la realidad que vive cada día buena parte de la población. La economía progresa y crece, nos dicen, pero eso lo viven más las grandes empresas del IBEX 35 (que rompe récords cada mes) que los ciudadanos de a pie, que se enfrentan cada día a enormes dificultades materiales. Las familias trabajadoras viven una situación muy distinta de la que nos pintan: inaccesibilidad a la vivienda, desahucios, bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo de salarios y ahorros a través de la inflación, despidos y cierres de empresas, facilitados por las reformas laborales que el Gobierno se niega a derogar, precariedad laboral, deterioro acelerado de los servicios públicos, como la sanidad y la enseñanza. Problemas que podrían tener solución, pero son otras las prioridades del Gobierno apoyado por las «izquierdas» que nos llaman a la «unidad»: incrementar el gasto militar para dar satisfacción a las exigencias de Trump.

Quienes se movilizan en defensa de reivindicaciones y derechos ven cómo el Gobierno no solo no atiende a sus justas demandas, sino que utiliza ampliamente contra ellos la Ley Mordaza —esa que prometieron derogar— y los instrumentos de represión policial y judicial, desde las tanquetas a las detenciones masivas, como en las huelgas del metal de Cádiz y Ciudad Real. Todo ello genera un ambiente de

descontento social, y de desafección y rechazo hacia los partidos de «izquierda» que sostienen al actual Gobierno y sus políticas. De eso vive la extrema derecha, que se presenta con un discurso antisistema y de confrontación directa con el Gobierno «progresista», con el que está logrando capitalizar buena parte del malestar social, como reflejan las encuestas y los resultados de las últimas elecciones regionales.

Quienes, con sus políticas que dan la espalda a las necesidades cotidianas de la población trabajadora, están alimentando el rechazo social, que acaba siendo capitalizado por la ultraderecha, han convertido la lucha contra esa misma ultraderecha en el centro de su discurso. Un discurso que deja indiferente a la mayoría de la población trabajadora, que en lo que piensa es en sobrevivir y que ve que ninguno de esos partidos defiende de verdad soluciones para sus problemas.

Vencer a la ultraderecha exigirá un programa de ruptura con el régimen y con la OTAN, que pusiera en el centro la vivienda, la sanidad, la enseñanza, las pensiones... Un programa que permitiera levantar una fuerza política basada en la defensa de las reivindicaciones, en las urnas y en las calles.

Luis González

Los idus de marzo

Hay a quien le gusta afirmar la verdad de que Franco murió en la cama, para negar la existencia de una clase trabajadora que trataba de romper el cerco del régimen franquista y que acabaría atrapada en el redil de la «transición». No hubo ley de punto final; la transición fue un punto y seguido.

El dos de marzo de 1974 sería ejecutado por el régimen franquista el militan-

trabajadores que se encontraban debatiendo cómo seguir tras la huelga de ese día, que había sido masiva, en defensa de mejores salarios y condiciones laborales. Los responsables de la matanza, los que dieron la orden de disparar a matar fueron: Fraga Iribarne (fundador de la AP y del PP), en aquel momento ministro de la Gobernación; Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (militante de la extinta UCD, actualmente milita en el PP); y el general Campano, director de la Guardia Civil, que posteriormente dirigiría la Operación Reconquista, culminada en los acontecimientos de Montejurra en la que dirigiría a mercenarios fascistas de otras nacionalidades y que acabarían asesinando ese mismo día a dos personas más. Tras el asesinato de los cinco trabajadores de Vitoria: Pedro María Martínez Ocio, de 27 años de edad, trabajador de Forjas Alavesas; Francisco Aznar Clemente, de 17 años de edad, estudiante y operario de panadería; Romualdo Barroso Chaparro, de 19; José Castillo García, de 32 años, trabajador de Basa, una sociedad del Grupo Arregui; Bienvenido Pereda Moral, de 30 años, trabajador de Grupos Diferenciales, falleció posteriormente. En las movilizaciones del día posterior también serían asesinados el joven Juan Gabriel Rodrigo Knafo, trabajador de la Petroquímica de Tarragona, y Vicente Antón Ferrero, de la localidad de Basauri, asesinado en la manifestación convocada 5 días después, el 8 de marzo.

Miguel González

«Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. ¿Cómo está por ahí el asunto? Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. ¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Aquí ha habido una masacre. Cambio. De acuerdo, de acuerdo. Pero de verdad una masacre»

Mazón y su Consell deben pagar

Miles de persona recorrieron las calles del centro de Valencia el 1 de marzo; era la 16.ª manifestación bajo el lema «Mazón a prisión. Consell dimisión» exigiendo que paguen los responsables de los 230 asesinados por la «grossera negligencia» de Mazón y su gobierno, según las palabras de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que instruye el caso y que, desde que se conocieron los primeros resultados de la instrucción, ha estado recibiendo presiones y amenazas para que abandone la minuciosa investigación que está siguiendo.

La lucha sigue después del 29-0.

Era tan evidente la responsabilidad de Mazón y de su gobierno en las muertes por la dana, que la movilización masiva y permanente del pueblo, organizada por los CLER, el ASV y las asociaciones de víctimas, terminó dejando en evidencia a las grandes organizaciones que miraban hacia otro lado, así que, por fin, decidieron sumarse también a las movilizaciones, y Mazón cayó; a pesar de todos los apoyos (directos e indirectos) recibidos, de todas sus maniobras y de sus mentiras compulsivas, tuvo que dimitir.

Era una victoria del combate de los trabajadores y del pueblo.

El combate sigue: Mazón ha de pagar por sus crímenes, su gobierno también. No es venganza, es salud democrática.

Dos dinámicas: las instituciones y el pueblo.

Desde el primer momento se han confrontado dos dinámicas: la del pueblo trabajador y los afectados exigiendo responsabilidades (verdad, justicia y reparación) a los gobiernos, y la dinámica institucional, concretada en la defensa del presidente de la GV, a pesar de quedar sobradamente demostrada su actuación criminal. Defensa realizada desde el Gobierno central, defensa desde la dirección del PSPV (en nombre de la estabilidad y de su aspiración avol-



ver a ocupar, mediante unas elecciones, la institución); intento de la Casa Real de calmar los ánimos y erigirse en «árbitro» institucional, capaz de estabilizar la situación por encima de los conflictos entre partidos y gobiernos, de los parlamentos o de los ayuntamientos. Todo fracasó; Mazón se vio obligado a dimitir.

¿Ahora qué?

Las aspiraciones y las reivindicaciones del pueblo valenciano chocan con la dinámica y la misma existencia de instituciones sometidas a los restos del franquismo. Quince meses después de la dana, Mazón, un criminal, sigue disfrutando de privilegios insoportables para el conjunto de la población: un sueldo de 80.000 euros anuales, despacho, dos secretarías de su elección, coche oficial y chófer; todo esto cuesta al erario 850.000 euros al año. ¡Y además sigue aforado!

Miles de ciudadanos siguen sin poder recuperar su vivienda o sus condiciones de vida previas y la reconstrucción se hace al margen de los intereses o reivindicaciones de los afectados; los beneficiarios de la «reconstrucción» son los bancos, las empresas constructoras y las grandes cadenas comerciales. Se repite la misma ordenación del territorio que provocó el catástrofe; continúa la misma estrecha relación entre administraciones y grandes empresas.

La Generalitat trata de vengarse de quienes se han negado a lavarle la cara,

a disminuir o diluir su responsabilidad (la institución); intento de la Casa Real de calmar los ánimos y erigirse en «árbitro» institucional, capaz de estabilizar la situación por encima de los conflictos entre partidos y gobiernos, de los parlamentos o de los ayuntamientos. Todo fracasó; Mazón se vio obligado a dimitir.

Las aspiraciones y las reivindicaciones del pueblo valenciano chocan con la dinámica y la misma existencia de instituciones sometidas a los restos del franquismo. Quince meses después de la dana, Mazón, un criminal, sigue disfrutando de privilegios insoportables para el conjunto de la población: un sueldo de 80.000 euros anuales, despacho, dos secretarías de su elección, coche oficial y chófer; todo esto cuesta al erario 850.000 euros al año. ¡Y además sigue aforado!

Miles de ciudadanos siguen sin poder recuperar su vivienda o sus condiciones de vida previas y la reconstrucción se hace al margen de los intereses o reivindicaciones de los afectados; los beneficiarios de la «reconstrucción» son los bancos, las empresas constructoras y las grandes cadenas comerciales. Se repite la misma ordenación del territorio que provocó el catástrofe; continúa la misma estrecha relación entre administraciones y grandes empresas.

La Generalitat trata de vengarse de quienes se han negado a lavarle la cara,

¡Mazón a prisión!
¡Consell dimisión!

Blas Ortega



te anarquista Salvador Puig Antich, sin duda el más recordado en la memoria popular por la forma, por la causa procesal y la solidaridad internacional, ante un régimen que agonizaba. Posteriormente, en el período denominado de la transición, la cifra de asesinados por las fuerzas represoras, en particular la Guardia Civil, la Policía Armada y grupos paramilitares fascistas, alcanzaría a 318 militantes, activistas de la clase trabajadora, hasta 1983. Solo son cifras oficiales y seguro que no están todos, como los que, sin ser asesinados, arrastrarían durante años las secuelas de las torturas, calabozos y prisiones. Dos años después, siendo el jefe de Estado, Juan Carlos I, al que se le ha construido el perfil y el relato del salvador de la democracia, cinco trabajadores caerían asesinados por balas de fuego de la Policía Nacional (armada) en Vitoria. Pertenecían al grupo de los más de 4.000

Situación en Aiaraldea

La comarca de Aiaraldea atraviesa uno de esos momentos que tristemente marcan época. Las recientes noticias relativas a los expedientes

músculo productivo ni capacidad industrial estratégica.

En el caso de Maderas de Llodio, además, la situación ha dado un giro



de regulación de empleo en Maderas de Llodio y en Tubos Reunidos han encendido todas las alarmas en un territorio que ya arrastra demasiadas heridas industriales sin cerrar. Más de 300 personas trabajadoras de toda la comarca se encuentran directamente afectadas por decisiones empresariales que, más allá de los números, suponen un golpe durísimo para familias enteras y para el conjunto del tejido económico y social.

No estamos hablando únicamente de puestos de trabajo. Hablamos de proyectos de vida, de hipotecas, de alquileres, de pequeños negocios que dependen del consumo de esas nóminas, de jóvenes que se ven abocados a marcharse y de personas con décadas de experiencia que contemplan con angustia un futuro incierto. Cada ERE no es solo una medida laboral, es un terremoto social en una comarca que no puede permitirse seguir perdiendo

relevante. Tras la denuncia interpuesta por la parte social sindical, la sentencia ha sido clara: el ERE ha sido declarado improcedente. Esta resolución judicial no solo supone un respaldo jurídico a la labor sindical, sino que pone en evidencia que no todo vale cuando se trata de recortar derechos y destruir empleo. La justicia ha reconocido que había argumentos sólidos para impugnar ese expediente y ha dado la razón a quienes defendían que no se ajustaba a derecho. Es un precedente importante que demuestra que la movilización, la organización colectiva y la acción sindical son herramientas eficaces cuando se ejercen con rigor y determinación.

Sin embargo, más allá de las resoluciones judiciales concretas, el problema de fondo persiste. La comarca de Aiaraldea necesita una estrategia industrial clara y un compromiso inequívoco por parte de las instituciones.

No se puede permitir que ayuntamientos, diputaciones o el propio Gobierno vasco se limiten a declaraciones genéricas mientras cientos de personas ven como su estabilidad se desmorona. Ponerse de perfil no es una opción cuando está en juego el futuro de toda una comarca que ya ha sufrido demasiado en procesos anteriores de reconversión.

Desde una perspectiva sindical, la exigencia es firme y clara: las instituciones deben implicarse activamente, promover mesas de trabajo reales con participación sindical, exigir planes industriales viables y condicionar cualquier ayuda pública al mantenimiento del empleo y a garantías sociales efectivas. No es aceptable que se socialicen las pérdidas mientras se privatizan los beneficios. Si se destinan recursos públicos, deben servir para garantizar actividad productiva, arraigo territorial y empleo digno, no para facilitar procesos de desmantelamiento o ajustes injustificados.

Aiaraldea ya ha demostrado en otras ocasiones su capacidad de resistencia y movilización. La respuesta social ante estos ERE está siendo firme, y la sentencia favorable en el caso de Maderas de Llodio refuerza la convicción de que la lucha merece la pena. Pero no basta con resistir; es imprescindible construir alternativas sólidas y sostenibles que permitan mirar al futuro con esperanza.

Estamos ante un punto de inflexión. O se apuesta decididamente por reindustrializar, por consolidar empleo de calidad y por proteger a las personas trabajadoras, o se asumirá el riesgo de convertir la comarca en un territorio cada vez más debilitado y envejecido. Las instituciones tienen la responsabilidad y la obligación de estar a la altura. Porque lo que está en juego no son cifras en un balance, sino el presente y el futuro de Aiaraldea y de quienes la sostienen cada día con su trabajo.

Raúl Ayuso
sindicalista UGT-Euskadi

Campaña contra la Ley Mordaza, por la anulación de las sanciones

Entrevista a Paco Cepeda (delegado de CCOO y miembro del colectivo Sindicalistas x auditoría)



Información Obrera: En el último número de I.O informábamos de la campaña iniciada para que el ministro de interior Marlaska considere en su recurso de alzada la retirada de las multas impuestas a Ángel García y a ti. ¿Cuál ha sido la respuesta?

Paco Cepeda: Pues en primer lugar quería agradecer desde estas páginas a todos los colectivos, plataformas de pensionistas, secciones sindicales, comités de empresa, compañeros y compa-

ñeras que se han dirigido al ministro Grande Marlaska para que retire las multas.

Más de 100 comunicados enviados al Ministerio, entre ellos, la sección sindical de CCOO Stellantis, de Madrid, la sección sindical del Metro de Madrid de CCOO o la de John Deere -CCOO en Getafe, comités de empresa como los de CESMA-Boadilla.

También diversas organizaciones de Izquierda Unida, Upta-UGT Euskadi, COESPE o los compañeros del sindicato de Sanidad de Sevilla de CCOO y la Federación de Pensionistas de CCOO Toledo.

Información Obrera: La ley mordaza lleva en vigor 10 años, durante los cuales ha habido cientos de miles de sancionados, aplicando esas sanciones en la mayoría de los casos contra aquellos que reivindican, en el caso vuestro por una movilización en defensa del sistema público de pensiones y por la auditoría. ¿No habría que exigir al gobierno Sanchez la derogación de La ley Mordaza, que fue promesa electoral?

Paco Cepeda: Claro, hemos contactado con diversos grupos parlamentarios y nos han respondido Sumar, Podemos y ERC para que hicieran una pregunta parlamentaria al ministro Marlaska, exigiendo la retirada de multas y planteando la necesidad de la derogación de la ley Mordaza del PP.

Corresponsal

No olvidemos Adamuz

La catástrofe ferroviaria de Adamuz sucedió el 18 de enero. Que nadie pretenda que la olvidemos, porque sus 46 muertos y 292 heridos muestran a dónde lleva el deterioro de los servicios públicos.

Los pueblos del Estado español estaban horrorizados ante ese desencarriamiento en la alta velocidad que produjo choques, tumbó vagones, los levantó y lanzó a distancia. Era el primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente ferroviario más grave del país en el siglo XXI tras el de Angrois de 2013.

Retenimos a nuestra web para un resumen de todo lo sucedido.

Inmediatamente, el Gobierno se declaró consternado. El ministro Oscar Puente afirmó inicialmente que el accidente era «tremendamente extraño» porque se había producido en una recta, el tren de Iryo era relativamente nuevo, con 4 años de antigüedad, y la vía había sido «completamente renovada» en mayo, tras una inversión de 700 millones de euros.

Hoy no existe aún un informe sobre lo que pasó.

Por qué

Sabemos que la hipótesis central de la investigación se centra en el desgaste de las vías: una soldadura en la vía se rompió. En una vía recién repasada por el plan de renovación.

Lo más preciso por parte del Gobierno ha sido dar una lista de 10 muy grandes empresas que están implicadas en el accidente, empezando



por el gigante Arcelor Mittal. No fue una chapucilla, sino una obra pagada con millones por el Estado, que al cabo de poco tiempo falla con resultados mortales.

Sabemos que a raíz de la crisis económica de 2008, se hundió la inversión en los ferrocarriles. En cambio, en 2020, el Gobierno liberalizó-privatizó

el transporte ferroviario de viajeros cumpliendo directrices de la Unión Europea. Con ello entraron nuevos operadores en el mercado, aumentó el número de trenes y viajeros, incrementando la presión sobre la infraestructura ferroviaria. Hubo un crecimiento notable del tráfico, especialmente en alta velocidad, con 17,2

millones de viajeros adicionales (un 77,2% más) de 2019 a 2024.

El gasto en mantenimiento por kilómetro de vía se ha mantenido relativamente estable durante la última década. En cambio, el gasto por viajero y por plaza ofertada en alta velocidad ha experimentado una tendencia a la baja en el mismo periodo. Total,

se ha desarrollado el ferrocarril, sin la financiación indispensable.

Han pasado casi dos meses

El 23 de enero, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios había publicado un avance de la investigación, planteando como hipótesis de trabajo la rotura de la vía como causa del desencarriamiento del tren de Iryo. El informe preliminar señaló que hallaron muescas en la banda de rodadura de los coches 2 a 4 del tren de Iryo, y además, también en otros trenes que circularon con anterioridad el mismo día. En el coche 5 las muescas presentan un patrón diferente, lo que, según los investigadores, encaja con el momento en que el carril pudo comenzar a volcarse hacia el exterior. Todavía no hay resultados.

Probablemente haya que pedir responsabilidades por el plan de renovación o por su ejecución por las grandes empresas.

Sobre todo, hace falta que el Gobierno y las Cortes elaboren y decidan un plan de recuperación de todo el sector ferroviario. Un plan digno de la red ferroviaria de alta velocidad de España que es, con casi cuatro mil kilómetros en servicio, la más extensa de Europa y la segunda del mundo.

Andoni Zarra

Puedes ver el complemento del artículo en la página de I.O.
<https://informacionobrero.org/recordemos-los-hechos-de-adamuz/>

El Gobierno y las Autonomías deben dar respuesta a la huelga de médicos

Los sindicatos de médicos han convocado una semana de huelga al mes hasta el mes de junio, en protesta contra el borrador de Estatuto-Marco del Personal de la Sanidad Pública

quirúrgicas y consultas, contribuyendo a agravar unas listas de espera que ya estaban desbordadas.

Como hemos señalado en anteriores números de Información Obrera, la

reivindicación. Pero en lugar de actuar, se pasan la pelota los unos a los otros, mientras decenas de miles de enfermos sufren las consecuencias de la huelga.

Algunos gobernantes de comunidades del PP han salido públicamente a expresar su «solidaridad» con las reivindicaciones de los médicos. Pero acabar con las guardias de 17 o 24 horas, y subir el pago de las horas de guardia, igualándolas, al menos, con la hora ordinaria de trabajo, entra plenamente dentro de sus competencias, en una sanidad cuya gestión está transferida a las Comunidades Autónomas.

Aunque también puede hacerlo, por ley, el Ministerio de Sanidad (de hecho, uno de los borradores del Estatuto llegó a incluir la igualación del pago de las guardias, como mínimo, a la hora ordinaria, pero desapareció del texto, al parecer, a petición de las Comunidades Autónomas).

Las consecuencias de la huelga aumentan el ya importante deterioro de la sanidad pública. Gobierno central y gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar, y presentar a los médicos planes de incremento de personal que permitan terminar, de forma planificada, con las guardias interminables. Y las Autonomías deben, de inmediato, subir la retribución de las guardias médicas.

LG

Concentración en Getafe en defensa de la sanidad pública

El pasado 28 de febrero tuvo lugar una concentración frente al Hospital Universitario de Getafe, formando parte de la preparación de la gran manifestación que tendrá lugar próximamente en Madrid.

La concentración contaba con el apoyo del PSOE, Podemos, Compromiso con Getafe / Más Madrid, CC. OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Vecinos y Vecinas de

equipos profesionales completos.

Desde Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos, se hizo un llamamiento a seguir manteniendo la movilización en defensa de la sanidad pública y se reclamó la necesidad de la unidad para echar atrás los ataques de los que es objeto.

Cada 15 días, el colectivo Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos convoca una asamblea concentración en la



pagado por el Ministerio de Sanidad con los sindicatos SATSE, CCOO, UGT y CSIF.

La huelga, aunque ha tenido un seguimiento irregular, ha motivado la suspensión de miles de intervenciones

huelga tiene como causa principal el rechazo de los médicos a las jornadas de trabajo interminables y las guardias de 17 o 24 horas. Es responsabilidad del Gobierno y de las Comunidades Autónomas dar solución a esta justa



Un sanitario leyó el manifiesto por la sanidad pública en la concentración

Barrios y Pueblos.

Hubo intervenciones de trabajadores del hospital exigiendo la derogación de la Ley 15/1997, que privatiza nuestra sanidad y la necesidad urgente de más profesionales en atención primaria y hospitalaria.

También se reivindicó que haya pediatras mañana y tarde en cada centro de salud de cada barrio, además de urgencias abiertas en Los Angeles con

plaza del Ayuntamiento de Getafe, la próxima será el miércoles 4 de marzo a las 18.30.

Los compañeros y compañeras del CATP que participamos en la concentración repartimos una hoja informativa sobre la nueva ley anunciada por la ministra de sanidad, Mónica García.

Corresponsal

La ministra y la Ley 15/97

Extractos de la declaración de Información obrera del 19/02/2026

En 1986, los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad ya abrían una vía de privatización de la sanidad, por medio de los conciertos y conciertos singulares. En 1997, el primer Gobierno de José María Aznar, aprueba la Ley 15/97, que abre un amplio abanico de posibilidades de privatización.

Según el artículo único de esa ley, «en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho».

La ley fue aprobada con el apoyo del PP, PSOE, PNV, CIU y CC.

La Ley 15/97 abre un amplio abanico de vías de privatización. El ingenio privatizador crea muchas figuras para ello (conciertos, consorcios, fundaciones, concesiones administrativas...)

Como resultado, según un informe elaborado por el Ministerio en diciembre, el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023. «La proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%», señala el documento.

El sistema permite que, en 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada fueran financiadas con fondos públicos.

¿La nueva ley de Mónica García supone la derogación de la Ley 15/97?

Sobre el papel, lo supone, ya que in-

cluye una disposición derogatoria que así lo dispone. Pero la pregunta es: ¿la nueva ley pone fin también a los procesos de gestión privada del Sistema Nacional de Salud establecidos amparándose en la Ley 15/97? En tal caso, la respuesta es que no.

El texto de la ley dice que «la gestión del Sistema Nacional de Salud se orientará hacia un modelo eminentemente público». Y añade que «La

voluntad de limitación. Vía libre a fundaciones y entidades religiosas».

Es más, podrán ponerse en marcha nuevos procesos de privatización. Según el comunicado del Ministerio de Sanidad, «El anteproyecto limita la gestión indirecta a situaciones excepcionales, permitiéndola solo cuando no sea posible la prestación directa, se garantice sostenibilidad financiera y eficiencia y se cumplan requi-

justificativa elaborada por la administración sanitaria, el análisis por un comité de evaluación para la gestión sanitaria indirecta, compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil, la publicación obligatoria del informe y resolución en el boletín oficial correspondiente y en la sede electrónica de la administración sanitaria». Además, «en el caso de concesiones de servicios, será preceptivo un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera».

La nueva ley no impide nuevas privatizaciones, ni obliga a revertir las que ya existen

Las únicas formas de gestión privada que la ley elimina definitivamente son las «fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio». Ciertamente, ese sistema-modelo Alzira- figura entre las más nocivas de la privatización, y hay que felicitarle de su desaparición, pero no son las únicas formas de privatización.

También propone la ley «mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad». Por tanto, esos modelos seguirían en pie, aunque estén más controlados.

Las privatizaciones que ya están funcionando seguirán haciéndolo. El Ministerio alega que la ley no puede aplicarse de manera retroactiva, y el proyecto de Ley dice que «La presente ley no será de aplicación a los expedientes de conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración para la prestación de servicios sanitarios. [...] asimismo, se seguirán rigiendo por las normas vigentes en el momento de su adjudicación los conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de

colaboración que estuvieran en ejecución en el momento de entrada en vigor de la presente ley».

¿No se podía hacer de otra manera?

La ILP presentada por las Mareas Blancas de Andalucía, cuya tramitación fue aprobada por el pleno del Parlamento Andaluz, dice: «En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta, mediante concierto, convenio o cualquier otra fórmula, los servicios, centros y establecimientos sanitarios que se creen o se estén gestionando de forma directa en el marco del Sistema Nacional de Salud», y establece que «Los convenios y conciertos sanitarios en vigor actualmente se mantendrán activos, pero la Consejería de Salud deberá ir planificando el necesario aumento de centros y recursos públicos para que, en un plazo no superior a cinco años, los conciertos se adapten a lo estipulado en el artículo 73, apartado 2».

¿Qué proponemos?

1. Prohibición absoluta de poner en marcha nuevos procesos de externalización.
2. Reversión automática a lo público de los servicios y hospitales hoy sometidos a gestión privada, cuando termine su periodo de concesión.
3. Mecanismos precisos y concretos de inspección del funcionamiento de esos servicios de gestión indirecta, garantizando la calidad del servicio, el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos de su personal.
4. Presupuesto de urgencia para la sanidad pública, que permita ampliar horarios y dotación de los centros existentes y poner en marcha nuevos centros. Ese dinero puede salir del exorbitante aumento del gasto militar.



gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las administraciones sanitarias competentes se llevará a cabo preferentemente de manera directa».

Según la Consulta Pública de la Ley, lo que ésta pretende es la «limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro». Limitar no es eliminar. La gestión de la sanidad pública por medio de entes privados sigue siendo posible. Y si el ente privado es «sin ánimo de lucro», no hay

sitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio».

Es más, la ley establece incluso mecanismos para abrir nuevas privatizaciones: «Las administraciones sanitarias competentes [...] contemplarán un procedimiento de evaluación previa en los supuestos de gestión indirecta». Como explica la Consulta Previa, «requisitos previos para nuevos procesos de gestión privada: se establece un procedimiento de evaluación previa obligatorio para estos casos, que incluye una memoria

La resistencia de la universidad pública provoca fisuras en el gobierno madrileño: ¡hay que seguir hasta ganar!

La Comunidad Autónoma de Madrid es un buen ejemplo de la afirmación de Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, acerca de que «el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa». Su actuación en los sectores de la enseñanza y la sanidad lo revela con nitidez.

El significado de estas actuaciones queda reflejado en el ataque a las universidades públicas, como se revela en el Plan Económico Financiero presentado por el rector de la Complutense vergonzosamente sumiso al gobierno regional. Un plan cuyo contenido destructivo analizamos en el artículo «No al chantaje de Ayuso: retirada del Plan Económico Financiero del rectorado de la UCM», disponible en:

<https://informacionobrero.org/no-al-chantaje-de-ayuso-retirada-del-plan-economico-financiero-del-rectorado-de-la-ucm/>

Un ataque recrudecido doblemente en los últimos meses, con los recortes presupuestarios y con la amenaza de una nueva ley universitaria regional, bautizada Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

Con esta ley, además de reafirmarse un marco financiero que ahoga a la universidad pública, se ataca su autonomía al permitir que una serie de órganos queden subordinados al gobierno regional, atendiendo por tanto a intereses ajenos a los propios de la universidad pública. Junto a ello, se quiere precarizar aún más las condiciones laborales, además de promover en mayor medida el negocio privado mediante las universidades privadas, para cuyo funcionamiento se les ofrece poco menos que barra libre.

Pero las universidades se han levantado frente al ataque constante del capital, realizado a través de su consejo de administración que es el gobierno madrileño. Ya en el curso académico 2024-25 se desplegaron importantes movilizaciones que, en este curso 2025-26, culminaron, por el momento, con la huelga de 48 horas en todas las universidades públicas madrileñas, los pasados 26 y 27 de noviembre, con un seguimiento masivo.

En este contexto, el 16 de febrero es cesado el consejero de Educación (Viciana), el día siguiente dimiten tres diputados del PP en la Asamblea (Lavín, Pasarón y Posse) y aún hay más dimisiones después (el director artístico del Ballet Español) y ceses (dos directores generales). El cese del consejero fue presentado oficialmente como una decisión de gestión para reimpulsar la tramitación de la LESUC, ampliamente rechazada por las universidades y otros sectores sociales.

Para entender esta fisura en el gobierno regional y el grupo parlamentario del PP debe considerarse una forma de funcionar propia de la derecha española: cual astracana,

Complutense debe romper su sumisión a Ayuso y su plan destructor, retirando el PEF y poniéndolo del lado de la comunidad universitaria a la que debe representar, para exigir la financiación pública adecuada y la retirada definitiva del proyecto de nueva ley.

Las movilizaciones realizadas hasta ahora han sido valiosas, como revelan también las fisuras en el gobierno y el PP. Pero no son suficientes. Porque el objetivo no es movilizarse de una forma testimonial, sino lograr la legítima reivindicación de que las universidades públicas sean adecuadamente financiadas para llevar a cabo su función social. Por eso y ante la gravedad de la situación,



Viciana representa a una pequeña fracción a la que se denomina Los Pocholos. En el nombramiento de Viciana no había ningún fundamento ligado a su conocimiento o capacidad relativos a la enseñanza. Puro sistema mafioso de cuotas y decisiones a dedo de arriba abajo. Al igual que en su cese.

Pero no es el factor determinante. La clave radica en la consecutiva actuación de las universidades en defensa de su supervivencia. Porque las políticas del gobierno regional buscan su destrucción como tales, del modo que revela el plan mencionado del rectorado de la Complutense, que parte de asumir la continuidad del recorte del 35% de su presupuesto.

Todo esto plantea también, claro, una conclusión. El rectorado de la

una perspectiva debe abrirse paso, acorde a la voluntad de lucha expresada fehacientemente en las universidades: la huelga general indefinida, minuciosamente preparada y, desde luego, buscando el apoyo del conjunto de la clase trabajadora y, por tanto, de los sindicatos de clase de todos los sectores.

Última hora: los rectores de las universidades públicas madrileñas se prestan a escenificar con Ayuso, el martes 3, un supuesto arreglo presupuestario que es en realidad absolutamente falso. Informaremos detalladamente de ello en el próximo número de Información Obrera.

X. Arribabalo, trabajador de la Complutense y afiliado a CCOO

Convocadas nuevas jornadas de huelga del personal educativo en Catalunya

Tras la multitudinaria jornada de huelga del día 12 de febrero del sector de la enseñanza de Catalunya, se han convocado nuevas jornadas de huelga para los días comprendidos entre el 16 y el 20 de marzo.

Las jornadas de huelga de los días 16 al 19 serán de carácter local y cada una de ellas se limitará a determinados servicios territoriales: lunes, 16 de marzo, habrá huelga en los centros educativos de las comarcas del Baix Llobregat, y la comarca del Barcelonès que incluye a la ciudad de Barcelona; martes, 17, en la ciudad de Tarragona y en las comarcas de las Tierras del Ebro y del Penedès; miércoles, 18, en Lleida, en las comarcas del Pirineo y la Cataluña Central; jueves, 19, en las comarcas del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental y Girona, y viernes, 20, en toda Catalunya, que será la jornada final y que irá

acompañada, en semejanza con la jornada del 12 de febrero, de una nueva manifestación unitaria en Barcelona.

La estrategia sindical es novedosa pues, aunque implicará una semana entera de movilizaciones, los enseñantes, a nivel individual, participarán como mucho en dos jornadas de huelga, una local y otra extendida a todo el territorio catalán.

La Administración catalana no ha sido indiferente al éxito obtenido por los sindicatos convocantes USTEC, ASPEPC-SPS, CC. OO., CGT, UGT y ofrece al profesorado un incremento de 2500 euros anuales en un periodo de 4 años. Es significativo que el incremento haya pasado de 1500 euros a 2500 euros en el periodo de una semana.

Esta oferta económica es considerada insuficiente por la representación

sindical, pero el incremento retributivo no es la principal reivindicación de los enseñantes, pues se exige al Gobierno de la Generalitat de Catalunya recursos humanos que permitan atender a la problemática que el decreto de escuela inclusiva ha introducido en las aulas. Son necesarios menores ratios de alumnos y la contratación de veladores y técnicos de educación intensiva que permitan atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

La Administración catalana no sólo debería ofrecer un mejor incremento salarial al personal educativo sino llevar a cabo una inversión, en personal de apoyo educativo, muy superior al montante económico que representa la mejora salarial propuesta.

José Francisco Domínguez, Profesor y sindicalista de CC. OO.

Ante la nueva Ley de Vivienda catalana

La nueva Ley de Vivienda catalana se está fraguando en medio de la elaboración de los nuevos presupuestos de la Generalitat. El Govern del PSC busca apoyos para lograr la aprobación de los presupuestos a falta de una mayoría clara dentro del Parlament. Los Comuns se prestan a dar su apoyo con la condi-

ción de que se aplica o no la normativa, así como el control de sus incumplimientos.

Esta ley todavía está en discusión y deberá pasar por el Parlament de Catalunya. Pero no quedará así. El Sindicat de Llogateres tendrá un papel fundamental para que se contemple realmente la prohibición de todo tipo



de especulación. Mediante la movilización de la vivienda y del movimiento obrero deben responder para exigir una ley que no vuelva a tener rendijas donde los buitres puedan colarse y seguir especulando.

Tenemos claro que una ley catalana no solucionaría por completo el problema, debe exigirse la prohibición de la compra de vivienda para hacer negocio en todo el Estado. También hay otra cuestión, con todas las propiedades que ya tienen los fondos buitres y grandes propietarios, que no son pocas, ¿qué hacemos? La urgencia lo exige, hay que expropiar a los fondos buitres y los grandes propietarios para poner esas viviendas a disposición de la población.

Nos encontramos en una situación política en la que, ante el calibre del problema, los discursos de enfrentamiento entre iguales cogen peso. La culpa es del inmigrante, que los jubilados cobren más que los jóvenes es la causa del problema o que la juventud es una derrochadora y por eso no pueden comprarse un piso. Pero no surgen porque sí. Los partidos y organizaciones que dicen defender a la clase trabajadora en todo su conjunto no toman las soluciones necesarias: enfrentarse a los fondos buitres y grandes propietarios, a los poderosos. La falta de una referencia política que recoja todo el malestar y luche por revertirlo es el mejor terreno para que los discursos reaccionarios crezcan y se expandan.

Las casas son para vivir, no para especular. ¡Acabemos con el negocio de la vivienda!

Además, es una ley que deja en manos de los Ayuntamientos decidir si

Victor Iniesta



Declaración de ASTRADE: Nos llevan al desastre, nos llevan a la III Guerra Mundial

Por su interés Información Obrera reproduce íntegramente la declaración de la Asociación Astrade del 4 de marzo de 2026

Contra la guerra: Ni Putin ni OTAN ni Trump ni Netanyahu ni...

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) muestra su apoyo al Gobierno en su digna postura de no permitir que las bases de Rota y Morón sean utilizadas como punto de apoyo a una nueva guerra.

La OTAN ha sido desde siempre una herramienta al servicio de los intereses de los Estados Unidos de América (EE.UU.) Lo único que ha cambiado es que la brutalidad de Trump y su ideología neofascista va más lejos y más rápido que otras administraciones que han precedido a la suya. Prueba de ello es que el secretario general de esa estructura militar se maneja como un auténtico lacayo del autócrata de la Casa Blanca. Otra prueba que hace evidente la subordinación de la OTAN a los EE.UU. es que Trump no considera las bases en España, o las que tiene en cualquier

otro país, como bases de la Alianza, sino como bases suyas desde las que puede hacer lo que le dé la gana, ha dicho literalmente.

La actual agresión a Irán, que no al régimen teocrático, pues Trump ha declarado que él desea una relación con los ayatolás como la que ha impuesto en Venezuela, revela que lo que los EE.UU. buscan es un doble objetivo, al menos: controlar las reservas petrolíferas y los pasos de la navegación mundial.

EE.UU. controla, bien directamente, bien por connivencia con satrapías o por sometimiento de los gobiernos, el 70% de los países del ranking top-10 con mayores reservas de petróleo del planeta, por este orden: Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, los propios Estados Unidos de América y Libia. De este top-10 no controla absolutamente a: Irán, Canadá y Rusia.

De los pasos y/o canales estratégicos del mundo, los EE.UU. controlan el Canal de Suez, mediante el Estado sionista de Israel y el régimen militar egipcio; el estrecho de Gibraltar, con el servil Marruecos y sus bases en Rota y Morón, -por lo que el enfado de Trump va más allá del simple "no me dejan repostar"-.

Hay otros cuatro estrechos estratégicos para el control del comercio mundial, y los cuatro están amenazados, como son: el estrecho de Bering en el Ártico, -una de las motivaciones del imperialismo yanqui en Groenlandia-; el estrecho de Ormuz, ahora incendiado por Israel y los USA; y el estrecho entre Yibuti y Yemen, otra zona atacada permanentemente por Israel y los USA; y el Canal de Panamá, otro objetivo declarado de Trump.

Es evidente que el fin último del capital financiero estadounidense y de las instituciones de ese país es aco-

rralar y cortar el comercio a Rusia y China, las otras dos grandes potencias del mundo. ASTRADE no toma partido por ninguna potencia, sea económica o sea militar: imperialistas y oligarcas nos parecen parte del mismo problema de la humanidad: la barbarie al servicio del enriquecimiento de una minoría.

La conclusión es que nos llevan al desastre, nos llevan a la tercera Guerra Mundial. Puede sonar apocalíptico, pero es una situación que el mundo ya ha vivido, en dos ocasiones en el siglo XX.

Las consecuencias ya se comienzan a notar con el incremento del precio de los combustibles que, de inmediato, se trasladará a las energías domésticas: luz y gas y a todos los productos básicos, como ya hemos vivido en los cuatro años de guerra en Ucrania. Si alguien se pregunta ¿por qué crecen el número de ricos y el número de pobres? Solo tiene que ver

que la guerra es un medio y un negocio utilizado y aprovechado por los ricos para saquear a los pobres y empujar a la pobreza a los asalariados más débiles de lo que llaman clases medias, al paso que se apoderan de grandes mercados; como ha hecho Estados Unidos de América con el mercado del GNL y el petróleo en Europa.

Es vergonzosa la posición servil y colaboracionista del PP y VOX, patriotas de pacotilla que lamen las botas de dictadores y genocidas, añorando el sabor que mamaron del franquismo.

La izquierda tiene la oportunidad de cerrar filas y defender los valores que, por definición, debieran compartir. Es el momento de dar la voz a los pueblos del Estado español y que las grandes organizaciones, y las no tan grandes, llamen a movilizarse contra la guerra.

La Junta Directiva

Pueblos del Sur de Madrid con Palestina



El pasado sábado 28 de febrero, los comités de apoyo a Palestina de distintas ciudades del sur de Madrid: Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada, Pinto y Alcorcón, y apoyados por el movimiento Boycott, Divestment and Sanctions [BDS], la Asociación de Amistad Hispano-Palestina y Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), realizaron una marcha por distintas localidades de la zona.

La marcha partió de Móstoles y tras 2 horas acabó en Alcorcón, donde se hizo lectura de un comunicado.

Durante el trayecto se corearon consignas como «ya queremos ver como Pedro Sánchez cierra la embajada de Israel» o «romper, romper con Israel», reclamando la ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel.

Corresponsal

No a la utilización de las bases de Rota y Morón

Primeros firmantes

Los abajo firmantes, sindicalistas, apoyamos la decisión del gobierno de no permitir que las bases de Rota y Morón de la Frontera sean utilizadas para apoyar los bombardeos contra el pueblo iraní. Rechazamos absolutamente las amenazas del presidente de los EEUU, Donald Trump, contra España. Compartimos el punto de vista de que lo que centra la situación mundial es "¡No a la guerra! Llamamos a participar en todas las iniciativas contra la guerra, en las movilizaciones que se están convocando, y en el mitin internacional contra la guerra que se prepara en Londres para el 20 de junio y que cuenta con el apoyo de parlamentarios, sindicalistas y militantes del Estado español.

Mari Carmen Alonso Martín, Sindicalista UGT Servicios públicos-Enrique Dargallo Guerra Director de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE-José Francisco Domínguez Sevilla, Sindicalista CCOO y Profesor UPC-Luis González Sanz, miembro del Consejo de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía-Josep Guardiola Salinas, Sindicalista CCOO de Cataluña-Eduardo Hernández Oñate Ex presidente de ASTRADE y Sindicalista de UGT en Metro de Madrid-Juan José Limones Carrasco, Delegado CCO Sanidad Sevilla-Eugenio López Torres, Sº Organización sindicato de Sanidad CCOO Sevilla-Antonio Macías Borrego, responsable de Sanidad FSP-UGT Andalucía-Carles Nadal Catalan, sindicalista de CCOO-David Olivares Cantarero, delegado sindical CCOO Educación-Mª Esther Roca Yébenes, miembro del Consejo de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía-Miguel Sagiúes Navarro Secretario de ASTRADE, Sindicalista y Abogado Laboralista de CCOO-Jordi Setó Marsó Sindicalista CCOO Valles Occidental Educación-Roberto Tornamira Sánchez Pdte. de ASTRADE. Ex Secretario General de FeS-UGT Madrid. Militante del PSOE-Mª José Wanculen Castuera, miembro del Consejo Confederal de CCOO

Bilbao

Alto a la Guerra

El próximo día 13 de marzo frente a la subdelegación de Gobierno en Bilbao, en continuidad con el aniversario del referéndum OTAN se realizará una concentración donde intervendrán responsables de organizaciones y activistas que preparamos una delegación al Mitin Internacional «Londres 20J» desde el País Vasco El lunes 2 de marzo se reunió la Comisión Abierta creada para tal efecto y entre las adhesiones recibidas al Llamamiento y ya entregadas a los organizadores hay mensajes que dicen así:

Julia Iglesias López
Miembro de Kurdistanekei Elkartasun Ekimena
Estimadas camaradas:
Pertenezco a la Plataforma de Solidaridad con el Kurdistán (Kurdistanekei Elkartasun Ekimena) y suscribimos los acuerdos que nos habéis transmitido a través del escrito que me llegó en la sede de Podemos Bilbao. El motivo de nuestra adhesión es que aunque los pueblos tienen derecho pleno a la autodefensa, esta no debe ser entendida como belicista, y que consideramos urgente acabar con este delirio bélico imperialista al que nos están sometiendo los poderosos.

Miguel Ángel Díaz Catalá
del Proyecto Sociocultural y Comunitario Ventana al Valle de Viñales, Cuba.

Estimadas compañeras:
Os enviamos nuestra adhesión al manifiesto del Mitin no a la Guerra. El próximo lunes 9 de marzo se volverá a reunir de forma abierta a todos los que quieran contribuir al Mitin Internacional «Londres 20J» y la lucha contra la guerra, a las 18:30 h. en el mismo lugar, local cedido por PODEMOS en Camicería Vieja, 2 del Casco Viejo de Bilbao. Invitados quedáis.



HACIA EL MITIN INTERNACIONAL DE LONDRES (20 JUNIO 2026)

JUEVES 19 MARZO 19 H.

Organizan: Promotores del Mitin de Londres y Ateneo de Tetuán

TORRIJOS, 15
METRO: VALDEACEDERAS - BUS 49

EL ATENEODETETUAN @ATENEOTETUAN

¡SALARIOS, NO ARMAS!
¡PROTECCIÓN SOCIAL, NO GUERRA!

EN CONTINUIDAD CON EL ENCUENTRO MITIN DE PARÍS (4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2025)

PRESENTE
Enrique Borco
presidente del Ateneo de Tetuán

Jesús de Blas
profesor de Historia jubilado

INTERVENCIONES
Xabier Arrizabal
profesor de la UCM y miembro del CCOO

Damián Rodríguez
portavoz estatal de COE

Marilyn dos Santos
secretaria estatal de Feminismos de Poder

Bellpuig contra la guerra

El pasado sábado 28 de febrero en Bellpuig (Lleida), militantes de Àgora Republicana de ERC junto con otros militantes de izquierda nos reunimos en el marco del CATP para discutir sobre la actualidad de la campaña contra la guerra, en relación al mitin de Londres del próximo 20 de junio.

encuentro pacifista; por supuesto, la paz es el centro de la lucha contra la guerra, pero también contra la guerra social que genera. Miles de millones se envían para la matanza entre rusos y ucranianos mientras los servicios públicos e infraestructuras de todo el Estado necesitan de financiación urgente.

En torno al debate contra la guerra y cómo articular un movimiento que aglutine a todos los militantes y fuerzas que luchan, como es lógico, el debate de la unidad de la izquierda fue un punto central del encuentro.

Diferentes compañeros y compañeras expusieron la lucha que llevan desde su sector: educación, sanidad, infraestructura ferroviaria, migración y la defensa del campo.

Lo que quedó claro es que la necesidad de la unidad de la izquierda se hace sobre las reivindicaciones y con un programa que plasme las necesidades de la mayoría.

De Bellpuig saldrá una delegación para el mitin de Londres como parte de la delegación del Estado español; la lucha contra la guerra continúa.

Corresponsal



Jordi Estiarte, Alcalde de Bellpuig;
Jordi Salvador diputado de ERC por Tarragona
Anna Gómez portavoz de "Dignitat a les vies"

El Mitin de Londres no es solo una fecha a la que acudir, sino que es una campaña donde discutir con todos los sectores que quieren luchar por las reivindicaciones y que les preocupa organizarse para ello. Tampoco es un

Barcelona, inicia la campaña para el 20 de junio en Londres

Convocados por el CATP, el pasado día 3 de marzo en el Espai Línea en Barcelona se realizó la primera reunión preparatoria para las jornadas (conferencia y mitin) contra la guerra a celebrar en Londres el próximo 20 de junio.

Las intervenciones.

En el acto intervinieron Víctor Iniesta en representación del CATP; por Podemos intervino la secretaria de organización Susy Fernández; Ramón Fanquesa por la Coespe; Philippe Ogonowski por LFI (La Francia Insumisa) y Angel Tubau por Información

Unir esfuerzos y organización.

Todas las intervenciones fueron dirigidas a aunar los esfuerzos sin condiciones en la campaña contra la guerra, cada uno desde la organización o movimiento en el que participa y en particular frente a la agresión que sufre el pueblo iraní desde el ataque del pasado sábado por el Estado de Israel de Netanyahu y la administración de los EE. UU. que dirige Trump.

También se posicionaron contra la intervención militar en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores por el Ejército de los Estados Unidos, y por

del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

Así como sobre la contradicción que supone prepararse para la guerra, como se pretende, por ejemplo, con la obligación del pago del 5% del PIB y la defensa de las reivindicaciones más elementales, sanidad pública, vivienda digna, pensiones justas... ya que cualquier euro que se desvíe para la guerra lo es en detrimento de cubrir esas necesidades y reivindicaciones. También se informó sobre el hecho de que parte de la industria auxiliar del automóvil en el Baix Llobregat, entre otras zonas, ya se está preparando para una reconversión y poder introducirse en la industria armamentística, todo ello con el apoyo económico del Gobierno, cuyo ministro de Industria, Sr. Hereu, empezó a tener reuniones con los empresarios del sector.

la situación que viven el pueblo ruso y el ucraniano en una guerra que sus ciudadanos rechazan.

Los gestos del Gobierno

En el acto también se valoraron los gestos realizados frente al ataque sobre Irán por el Gobierno de Pedro Sánchez, condecorar de que los ciudadanos españoles están contra la guerra y, si bien son insuficientes, deben ser valorados frente a la posición de otros Gobiernos.

Se denunció que esta agresión no solo viola toda norma internacional, sino que incluso hasta va en contra

Extender la campaña

El acto concluyó con la resolución aprobada por unanimidad de trabajar en la campaña internacional, así como la de participar en la manifestación el 4 de marzo en apoyo al pueblo iraní y realizar actos y reuniones para extender la campaña.

Corresponsal



Obrera. También tomaron la palabra algunos de los primeros firmantes del llamamiento, como Rafael Aguilera y José Antonio Iniesta, sindicalistas de la UGT y organizadores de Ugetistas por Palestina; Diosdado Toledano, de la Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN no de Catalunya y responsable de la Secretaría de Internacional de Podemos; Luis Castañeda, miembro del grupo de Peruanos Autoconvocados de Barcelona, y Pedro García de la Plataforma de pensionistas de Badalona.

Comunicado de UPTA-Euskadi

Hoy martes 3 de marzo hemos amañecido con las tremendas noticias de que han sido cientos de niñas las que han muerto en el ataque a un colegio por parte del combinado Israel - EEU , que la guerra se extiende a docenas de países y que las consecuencias económicas y sociales hacen temblar al mundo del trabajo en todo el planeta.

Nos parece bien que el gobierno español niegue el uso de las bases de Rota y Morón para bombardear a Irán, y mejor sería incluso que se cerraran y en nuestro país todo el dinero que si hay se dedicara a producir bienes colectivos y salvar los servicios públicos.

No encontramos ninguna justificación para gastar ni un solo euro en rearmes ni guerras cuando al mismo tiempo se hacen necesarias y urgentes inversiones millonarias, por ejemplo para sacar a 500.000 autónomos que vivimos a nivel de pobreza hacia un empleo digno; cuando hace falta un plan de relevo generacional para que dejen de perderse miles de negocios personales o familiares por jubilación incluso siendo rentables o incluso cuando es imprescindible una rebaja de 5 puntos en el IRPF para que no haya una sangría en nuestro sector.

Nuestra organización, UPTA Euskadi, lo dijimos el 8 de junio de 2022 cuando se desató la guerra entre millonarios rusos y de la OTAN, lo dijimos el 24 de marzo de 2025 cuando se habló de 800.000 millones para

la guerra en Europa, 80.000 en España: nos vamos a implicar en la lucha contra la guerra porque nos va nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos en ello.

Hemos recibido la propuesta de que apoyemos la celebración de un segundo Mitin Internacional contra la Guerra, esta vez en Londres, el 20 de junio de este año, cuya información la podéis ver en: <https://www.tickettailor.com/events/stophetwarcoalition/2029668> y cuyo manifiesto hemos apoyado al mismo nivel que cientos de sindicalistas y organizaciones sindicales de 28 países, y que podéis consultar en nuestra página web (www.uptaueuskadi.org).

Al mismo tiempo invitamos a todos nuestros afiliados y amigos, a los autónomos y trabajadores en general, a los ciudadanos de buena voluntad que rechazan la guerra y que pensamos somos mayoría, a participar en las movilizaciones que recorren y recorrerán nuestra calles en los próximos días y meses.

1. <https://verifica.efe.com/imagenes-ataque-escuela-iran-no-kabul-como>



Getafe camino a Londres

Después de la reunión celebrada el pasado mes de diciembre con la participación de dos delegados que estuvieron presentes en el Mitin contra la Guerra, acordamos, una vez conocida la convocatoria de Conferencia-Mitin el 19-20 de junio en Londres, trabajar para que varias compañeras y compañeros formen parte de la delegación española.

El pasado 23 de febrero, tuvo lugar una reunión-cena donde se

trasladó la información más reciente sobre la preparación a escala internacional que ya cuenta con importantes apoyos, lo que convertirá esta iniciativa en un acto de hito.

El objetivo es de 8-10 (jóvenes y trabajadores/as), para lo que es necesario hacer una campaña económica para poder financiar los viajes. La cena-reunión ha sido un primer paso.

Corresponsal

Resolución de urgencia por la paz y los derechos sociales Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT del País Valenciano

La guerra impulsada por Donald Trump se está convirtiendo en un escenario casi cotidiano: el genocidio palestino sigue sin que ni la ONU ni los gobiernos occidentales lo detengan; la guerra en Ucrania cuenta con casi 800.000 bajas rusas y otras tantas ucranianas, y los gobiernos occidentales se convierten en parte activa del conflicto bélico.

A esta barbarie se une el secuestro del presidente de Venezuela en un ataque relámpago de los EE. UU.; ahora la población cubana está sufriendo los estragos del bloqueo de la Administración Trump, que despliega sus Fuerzas Armadas en el Pacífico y reclama Groenlandia. La barbarie parece no tener fin.

Trump y la OTAN exigen a todos los países miembros aumentar los gastos militares hasta el 5 % del PIB. El gobierno de Pedro Sánchez ha triplicado el gasto en defensa y destina 34.000 millones de euros anuales a gasto militar.

Dicen hacerlo en nombre de la seguridad, dicen que hay que potenciar la industria armamentística, pero la expe-



riencia de los años 30 del siglo pasado y toda la experiencia posterior nos dice que así solo se prepara la guerra.

Seguridad es tener una pensión, un trabajo y un salario dignos, una vivienda asequible y servicios públicos

capaces de satisfacer las demandas sociales adecuadamente.

Desviar inversiones de la industria productiva útil a la sociedad hacia la producción de armamento solo puede traer recortes sociales, destrucción y

muerte. Es responsabilidad del movimiento obrero y de los ciudadanos progresistas, como lo ha sido siempre, defender la paz, las libertades democráticas y los derechos sociales.

Dejar a la juventud y a las capas más vulnerables de la población sin futuro, dependientes de un escudo social precario, alimenta a la derecha y a la extrema derecha. Lo que se impone es un giro a la izquierda, la unidad de las fuerzas obreras y democráticas para conseguirlo.

En torno a estas consideraciones decidimos apoyar el mitin que se celebrará en Londres el 20 de junio de 2026 en el Westminster Central Hall.

Citamos extractos de la invitación a este mitin avalado por cientos de diputados, sindicalistas, artistas e intelectuales de 20 países de Europa:

«En el mitin contra la guerra celebrado en París en octubre de 2025, que reunió a miles de ciudadanos, sindicalistas, militantes políticos y pacifistas, comenzamos a dar la voz de alarma y a organizarnos por la paz. Fortalecidos por este éxito y por la resistencia de los pueblos que ya han rechazado la guerra y las

divisiones racistas que esta genera, nos reuniremos de nuevo en un mitin internacional en Londres, el 20 de junio de 2026. Invitamos a todos los jóvenes y trabajadores, a todos los sindicalistas y militantes pacifistas a participar en él. No aceptaremos el descenso a los infiernos del caos y la guerra, único logro de la presidencia de Trump. El presidente estadounidense Donald Trump, artífice de esta nueva escuela bélica, cuenta con redes internacionales belicistas de extrema derecha y chovinistas. Es cortado por los jefes de Estado de Europa, y no solo de Europa. Debemos crear nuestra propia red internacional que trabaje por la paz, se oponga al revitalizado proyecto imperialista estadounidense y luche por los medios de subsistencia y por la propia vida de los trabajadores. Queremos la paz.

Decimos no al rearme, no al servicio militar obligatorio, sí a los servicios de salud, educación y servicios públicos con todos los medios necesarios, a empleos útiles y a salarios más altos.

Uníos a nosotros.

Defendamos las pensiones públicas y los derechos de los colectivos vulnerables

Lo que está sucediendo de nuevo este año es intolerable.

Es un momento de profunda incertidumbre social, cuando el encarecimiento de la vida golpea con especial dureza a pensionistas, a personas vulnerables y trabajadoras, vuelve a situarse en el centro del debate la continuidad del llamado «escudo social básico». Lo que debería ser una garantía mínima de protección frente a la precariedad -subida de pensiones, freno a los desahucios, mantenimiento del bono eléctrico y prohibición de suministros- se encuentra hoy amenazado por la derecha política y los intereses financieros.

Es inaceptable que este Gobierno no sea capaz de garantizar el escudo social y deje la puerta abierta a la derecha y ultra derecha (PP, VOX, JUNTS,

... no toleramos que se confronte a pensionistas con la clase trabajadora y la juventud con problemas del derecho a la vivienda.

UPN) que antepone sus intereses particulares para empeorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Las movilizaciones de los días 21, 22 y 23 no nacieron de la improvisación. El movimiento pensionista ya había fijado esas fechas antes de que la derecha más reaccionaria tumbara definitivamente la moratoria de desahucios.

Desde las plataformas y movimientos de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado (COESPE, EHPM, MADPP, MODEPEN, UNIDAD COESPE, Plataformas de pensionistas de Badajoz, Móstoles...) veníamos advirtiendo que el llamado escudo social era frágil, insuficiente y permanentemente cuestionado por las fuerzas reaccionarias. También señalábamos que la insuficiente revalorización

de las pensiones, siendo una conquista necesaria, no podía convertirse en moneda de cambio ni en excusa para enfrentar a distintos colectivos de la clase trabajadora.

Por eso nos movilizamos para decir alto y claro que no toleramos que se confronte a pensionistas con la clase trabajadora y la juventud con problemas del derecho a la vivienda. Este toma y daca para no mantener el escudo social y someter a los pensionistas y a la sociedad al chantaje de los supuestos okupas (datos objetivos muestran que es un problema menor y resoluble).

Por eso las movilizaciones convocadas no solo son justas, sino que cobra más sentido mantenerlas.

La respuesta del movimiento pensionista no es aislada. Es una confluencia más amplia con el movimiento por la vivienda, con organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Sindicatos de Inquilinas, que vienen denunciando desde hace años la mercantilización de un derecho tan básico como el techo.

Cae el decreto de escudo básico... La lucha continúa

El jueves 26 de febrero es cuando finalmente la derecha reaccionaria dejó caer la protección básica por segunda vez. No hizo más que confirmar lo que ya estaba en el ambiente: las medidas de protección social siguen dependiendo de equilibrios inestables y de cálculos partidistas.

Más de 70.000 desahucios paralizados pueden reactivarse. Miles de familias vuelven a la incertidumbre. Esta decisión política reaccionaria deja a decenas de miles de familias trabajadoras al borde del abismo. Y ocurre cuando las movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda han sido de las más numerosas de los últimos años. Sin embargo, este

Gobierno ha sido incapaz de impulsar medidas estructurales que frenen la escalada de precios del mercado inmobiliario. Este año se van a extin-

pera ampliamente la pensión media. La mayoría de las plazas residenciales están en manos privadas. Millones de pensionistas cobran me-



Manifestación por una pensión digna, Madrid

guir más de medio millón de contratos de alquiler. En los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido alrededor de un 40%, muy por encima del crecimiento de salarios y pensiones. Se producirán decenas de miles de desahucios invisibles: personas que abandonan su vivienda antes de que llegue la orden judicial porque simplemente no pueden asumir el nuevo precio.

Por eso consideramos la caída de la moratoria como una agresión a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora.

Al mismo tiempo, el sistema de cuidados en la vejez se ha convertido en un negocio altamente rentable. El coste de una plaza en residencia privada su-

nos de 1.000 euros mensuales, y casi medio millón perciben pensiones no contributivas que no alcanzan los 600 euros, en su mayoría mujeres que sostuvieron durante décadas el trabajo de cuidados invisibles.

La vivienda se privatiza. La vejez se privatiza. La vida se convierte en mercancía. Mientras tanto, se nos dice que no hay recursos suficientes para garantizar los derechos básicos. Pero sí los hubo para rescatar a la banca. Si los hay para sostener beneficios empresariales, aumentar los gastos militares...

El problema no es la falta de recursos, sino las prioridades políticas. No es un conflicto generacional. No es culpa de los pensionistas que la

juventud no pueda emanciparse. No es culpa de la juventud que las pensiones sean insuficientes. Es un conflicto de clases. Un modelo que enfrenta al penúltimo con el último para que los de arriba sigan acumulando.

Nuestras reivindicaciones son claras:

- Sistema de residencias, suficientes, de calidad y con derechos laborales garantizados.
- Pensiones mínimas vinculadas al salario mínimo, incluidas las no contributivas y derogación de las reformas de pensiones y de la Ley de Promoción de los Planes Privados de Empleo.
- Prórrogas obligatorias de los contratos de alquiler de 3 años. Escudo social permanente y ampliado para evitar todos los desahucios.
- Expropiación forzosa de viviendas en manos de la banca rescatada para su integración inmediata al Parque Público.
- Ley contra la estafa a las inquilinas: fin del alquiler de temporada y habitaciones. (Estas reivindicaciones salen del manifiesto conjunto de COESPE, CSI Confederación de Sindicatos de Inquilinas, PAH, Plataforma de Afectados por la Hipoteca) en febrero de 2026.

El escudo social puede caer en el Congreso. Pero la lucha por la vivienda, los derechos públicos y por las pensiones dignas no cae.

Seguiremos movilizándonos. Seguiremos organizándonos. Porque envejecer no puede ser un lujo y tener un techo no puede ser un privilegio.

Ana Pérez

Pensiones Públicas Subir el IPC medio no garantiza conservar el poder adquisitivo



Manifestación de COESPE, Madrid

Actualmente la revalorización de las pensiones se calcula a partir del IPC medio, elaborado a partir de una cesta de bienes y servicios que no refleja el consumo real de las personas pensionistas. Esta cesta incluye partidas como ocio,

En nuestro país la pensión media contributiva es de 1.315 €

turismo, bienes tecnológicos, etc., que apenas forman parte del gasto habitual de un gran porcentaje del colectivo pensionista, mientras que los productos esenciales quedan diluidos en una media que rebaja artificialmente la suba final.

En nuestro país la pensión media contributiva es de 1.315 €. Alrededor del 80% de los ingresos se destinan a cubrir alimentación, electricidad, otros combustibles, vivienda y medicamentos.

La subida media de estos productos ha sido:

- Alimentación 2,4%.
- Gastos de vivienda, electricidad, agua y otros combustibles 6,8%.
- Medicinas 2%.

En conjunto la subida media de estos productos supone una media del 3,7%, un punto porcentual superior al 2,7% que se ha aplicado a la revalorización de las pensiones.

Sobre el papel las pensiones suelen el IPC. En la práctica el coste real de la vida sube más para quienes vivimos de una pensión.

La situación es más grave aún en el caso de las pensiones mínimas. Aunque estas reciben subidas porcentuales mayores, la cantidad de partida es tan baja que el resultado sigue siendo insuficiente para vivir dignamente.

La pensión de jubilación sin cónyuge se queda, después de la subida del 7,07%, en 936,20 €. Con cónyuge a cargo y un

La pensión de jubilación sin cónyuge se queda, en 936,20 €. y con cónyuge en 1.255 €.

porcentaje de subida del 11,4%, en 1.255 €.

Las pensiones de viudedad, a las que se ha aplicado el 2,7% (excepto las que tienen familiares a cargo, que es una exigua minoría), se quedan en una pensión media 963 €.

De estos datos podemos deducir que, en general, vamos acumulando pérdida de poder adquisitivo y que las subidas porcentuales mayores no son suficientes para disminuir la brecha de género, ni garantizar pensiones dignas que cobren al menos el SMI.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), recuerda que las pensiones mínimas y no contributivas siguen por debajo del umbral de la pobreza, mientras los beneficios de la banca y grandes empresas alcanzan cifras récord. Es una injusticia social y económica intolerable, por lo que se reclama que estas pensiones, de muy baja cuantía,

Las pensiones de viudedad, a las que se ha aplicado el 2,7%, se quedan en una pensión media 963 €.

se equiparen al salario mínimo interprofesional.

Encarna González
(portavoz estatal de COESPE)

ACTUALIDAD POLÍTICA

¿A quién representa el rey?



Felipe VI en La Casa Blanca

Según la prensa «Felipe VI llama a la contención en el uso de la fuerza y pide una salida diplomática, pero evita señalar la ilegalidad del ataque a Irán», por tanto no asume la posición del Estado español, expresada por el Gobierno. Felipe Borbón, según la Constitución, es irresponsable, por tanto no tiene derecho a expresar sus propias posiciones, debe repetir las del Gobierno.

El País tercia: «El Rey hace equilibrio sobre la guerra de Oriente Próximo ante la falta de consenso». «Los discursos del rey se pactan entre La Zarzuela y La Moncloa, con participación de los Ministerios directamente afectados en cada caso. Por eso, nunca contradicen la posición del Gobierno, aunque tampoco coinciden al 100% con la misma».

El País, contra la Constitución, pretende que el rey medie entre el PP y el PSOE. Es posible, pero no es su papel. En cualquier caso, ha mediado consigo mismo pues siendo (al igual que su padre) el primer agente USA en España, nadie le imaginaba criticando a los Estados Unidos por su bárbara guerra.

El 50.º aniversario de la Constitución en las Cortes



Invitados al aniversario de la Constitución en las Cortes

El 17 de febrero, las Cortes celebraron solemnemente la Constitución bajo el epígrafe «Nuestra Constitución más longeva». Un acto al que fueron invitadas 308 personas relacionadas con su promulgación, Martín Villa entre ellos. Una efeméride para mayor gloria de la Monarquía a la que debían acudir todos los diputados y senadores a aplaudir el discurso de Felipe VI. El discurso del monarca fue precedido por el de la presidenta del Parlamento, Francina Armengol. Ni el Gobierno ni los partidos políticos podían tomar la palabra. A pesar de toda la puesta en escena, el acto resultó lejano a la unidad que pretendía concitar.

El discurso del rey

Felipe VI repitió los tópicos habituales: «Por eso, más allá de los años que cumple la Constitución, lo que hoy celebramos es su legitimidad de origen: la

voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas. Esa credencial democrática es la clave de su duración; no fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra. Ahí está el espíritu de concordia que impulsó el proceso constituyente».

Una «voluntad de concordia» que llevó a Santiago Carrillo, a Felipe González, a los dirigentes del PCE y del PSOE y de los partidos nacionalistas a aceptar como democráticas las instituciones franquistas, a amnistiar y poner punto final a los crímenes de Franco y de sus oligarcas, a abandonar a los cientos de miles de asesinados y enterrados en las cunetas, y a traicionar los derechos sociales exigidos por la clase obrera y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, incompatibles con la Monarquía. Prometieron democracia, pero era para imponer la continuidad de las instituciones del ré-

gimen cubiertas por otras elegidas sin poderes efectivos; renunciaron con engaños a la lucha por la ruptura para imponer una verdadera democracia, es decir, la República.

Consenso y más consenso

El rey exige una y otra vez consenso: «el ordenamiento jurídico debe ser una arquitectura en cuyo interior se puede vivir, se puede convivir. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos. [...] Vivimos tiempos difíciles e inciertos. No pensemos que se debe a una menor vigencia del ordenamiento constitucional; todo lo contrario».

Un consenso, en fin, del que depende la permanencia de la Monarquía y que Felipe exige a todos hasta las últimas consecuencias: «cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia. Era el objeto del terrorismo, tan totalitario e inhumano que cuesta creer que todavía hoy haya quien lo justifique y no lo condene». Es el discurso permanente de los franquistas. Como decía el editorial del 18 de febrero del ABC: «Felipe VI recordó que "la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla". No hay mejor advertencia. La defensa activa de la legalidad y de la unidad de España no admite ambigüedades».

El discurso de Armengol

Armengol realizó un discurso protocolario para revestir la Constitución de una legitimidad democrática que no tiene, y que finalizó así: «Honremos esta Constitución, como hemos hecho

hasta ahora, hagámosla efectiva, cumplámosla, protéjámosla, durante muchos, muchos años». Aprobación y defensa sin matices de las instituciones heredadas del régimen de Franco que la Constitución del 78 impone, instituciones a las que se someten y protegen las Cortes elegidas.

Lo curioso de todo esto es que se la acusa de haber dicho que «las Cortes Generales son la sede de la soberanía popular». Según un comentarista del ABC, «la soberanía popular no existe; existe la soberanía nacional, que reside en el pueblo español y no en las Cortes». Según esta interpretación, un régimen plebiscitario, bonapartista, con un Parlamento de existencia puramente formal, sería constitucional.

Algunas consideraciones

EH Bildu, ERC, Junts, PNV, Compromís y BNG se negaron a asistir a la comedia institucional y a escuchar este discurso contra los trabajadores y los pueblos de España, contra la democracia, y emitieron un comunicado conjunto que concluye: «lejos de resolver la cuestión nacional y reconocer el derecho democrático de cada pueblo a decidir libremente su futuro, la Constitución Española asentó un modelo centralista que limita el autogobierno de los pueblos y subordina su voluntad a una concepción del Estado uniforme e indivisible. La negativa sistemática a habilitar vías democráticas para que la ciudadanía vasca, catalana y gallega pueda pronunciarse sobre su estatus político demuestra que el actual marco es insuficiente para dar respuesta a las aspiraciones nacionales y sociales de nuestros pueblos». Los diputados de Podemos asistieron

para exigir el cumplimiento íntegro de la Constitución, lo hicieron con camisetas blancas con un mensaje: «cumplirla "pa" cuándo». Para defender el derecho a la vivienda o cualquier otro derecho social o democrático no hacía falta acudir a ese acto institucional.

Esa Constitución no tiene ninguna

Una «voluntad de concordia» que llevó a Santiago Carrillo, a Felipe González, a los dirigentes del PCE y del PSOE y de los partidos nacionalistas a aceptar como democráticas las instituciones franquistas, a amnistiar y poner punto final a los crímenes de Franco

legitimidad ni obliga a nadie a respetarla. Los que acertaron fueron quienes no acudieron a escuchar al rey. Ese terreno institucional de apoyo a la Monarquía es en el que Vox y el PP encuentran su esencia política.

Nos hablan de la unidad de la izquierda, se nos proponen varias iniciativas electorales para frenar a la derecha y la ultraderecha. Pero para ello hace falta señalar que no hay democracia sin derogar la Ley Morada, que no hay democracia sin derecho a la autodeterminación de los pueblos, que no hay futuro ni condiciones de vida dignas sin derogar las reformas laborales, sin expropiar las viviendas con las que fondos buitres y bancos especulan, que no hay servicios sanitarios ni educativos, ni pensiones ni transportes públicos de calidad sin que los gastos militares se destinen a los servicios públicos. Que no habrá paz con la actual carrera de armamentos.

Blas Ortega

«Desclasificación» de documentos sobre el 23-F: otra maniobra para limpiar a la Corona



Votación en el Congreso del Pacto del Olvido

La tan careada desclasificación de algunos –que no todos– los archivos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 aparece como una maniobra –otra más– para salvar a la institución de la Corona, clave de bóveda del Régimen.

Tras la publicación de los documentos, Núñez Feijóo se ha apresurado a pedir que el «sinmérito» vuelva a España. El Gobierno no se opone, y todos parecen pasar por alto lo que El País define como «los escándalos por su fortuna opaca en Suiza de al menos 100 millones de dólares y el fraude a Hacienda, que intentó subsanar con una tardía y discutida regularización de más de 4 millones de euros».

Casi todos los medios de comunicación se han apresurado a publicar a toda página la misma noticia: la desclasificación prueba que el rey no estuvo implicado en el golpe. Hay un dicho latino, excusatio non petita, accusatio manifesta: el que se disculpa de algo sin que nadie le haya pedido tales disculpas se está señalando como autor de la falta.

Porque la versión más verosímil de los hechos del 23-F es la siguiente: se trataba de dar un «golpe de timón» a la

Anasagasti concluye que «nadie espere que salga implicado Juan Carlos de Borbón, verdadero sponsor de aquella sangrienta charlotada que él mismo tuvo que parar a tiempo

Transición, imponiendo un Gobierno de concentración nacional, bajo la dirección del general Armada, con participación de todos los partidos del régimen, incluyendo miembros del PSOE y del PCE. Todo ello auspiciado por Juan Carlos I. Pero el principal ejecutor del golpe, el teniente coronel Tejero, ocupante de las Cortes, hizo fracasar todo porque se negó a aceptar un Gobierno con «rojos». Y el Borbón se vio finalmente obligado a abortar el golpe.

Iñaki Anasagasti, buen conocedor de los entresijos del Régimen –no en vano fue miembro de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso– titula así su crónica de la «desclasifica-

ción»: «45 años después entregan cuatro papeluchos debidamente tratados». Y añade que «no se sacará nada claro con esta desclasificación interesada que no ha permitido una ley franquista de 1968».

Recuerda Anasagasti cómo, en una entrevista televisiva, el director del Cesid Alberto Saiz (2004 – 2009) declaraba que todo lo referente al 23 F había sido «debidamente tratado». Es decir, «cepillado». Y añade: «Nos tratan como a niños. O algunos se dejan tratar así. [...] como debían mantener incólume la figura del rey (todos eran juancarlistas) y de la sacrosanta Transición, pues a mentir de manera muy profesional. Y siguen mintiendo».

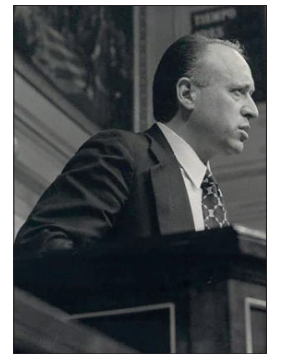
Anasagasti cita muchas fuentes. Como al ministro de la Presidencia con Arias Navarro, Antonio Carro, o como al embajador alemán en Madrid, que al volver a Alemania publicó un informe, reproducido en Der Spiegel, «diciendo que le había decepcionado profundamente el rey achacando el golpe a Suárez por no hacer caso a los militares, cuando tenían toda la razón». Y recuerda cómo, en las conversaciones grabadas por Bárbara Rey, Juan Carlos le dice que el general Armada era un jабato por haber teni-

do la boca cerrada y haber ido a la cárcel». Y otro dato es «el que me contó Marcos Vizcaya que fue contactado por Alfonso Guerra para ver cómo vería el PNV un Gobierno presidido por un militar».

Quintero concluye que, tras la negativa de Tejero al gobierno de concentración, «ya el monarca tenía claro que tenía que dar marcha atrás»

Anasagasti concluye que «nadie espere que salga implicado Juan Carlos de Borbón, verdadero sponsor de aquella sangrienta charlotada que tuvo, ante la irrupción espérfica de Tejero, tricorno, pistola y mostacho, él mismo que pararlo a tiempo. Todo lo demás es un cuento chino para créditos y buenos juancarlistas».

Por su parte, el bloguero Javier Quintero dice que «nos han contado un cuento de hadas», y recuerda cómo se ha desclasificado la conversación que mantuvo D. Juan Carlos con Milans del Bosch a las 1:20h de la noche después de su mensaje televisado y después que Tejero se negara a la operación de gobierno de concentración que le trasladó Armada, pero



Discurso del Pacto del Olvido, Arzalluz

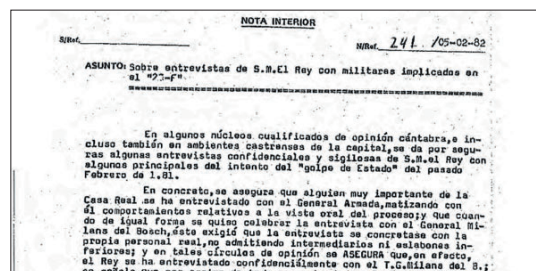
«no se han publicado y no se han desclasificado las conversaciones del monarca con las Capitanías Generales. Pues muy fácil porque ahí el monarca no combinaba a las Capitanías Generales a que abandonaran el golpe, como sí hizo con Milans del Bosch después de saber que Tejero no aceptaba el golpe blando».

Quintero explica que «aunque se confirma que el monarca realizó llamadas a todas las Capitanías Generales para evaluar la situación, no se incluyen en los archivos desclasificados las transcripciones de dichas conversaciones. Por qué no se han desclasificado [...] presuntamente porque algunas ya las han quitado de en medio porque comprometía el cuento idílico que nos han vendido».

Quintero concluye que, tras la negativa de Tejero al gobierno de concentración, «ya el monarca tenía claro que tenía que dar marcha atrás» porque, «como presumiblemente le había dicho Sabino [Fernández Campos, secretario general de la Casa del Rey] y los que estuviesen a su alrededor que le dijeron que tenía que dar marcha atrás para salvar la corona, una vez que Tejero desbarató los planes del gobierno de concentración».

Pero la verdad siempre acaba por salir a la luz. Algún día se sabrá todo.

Héctor Lagar



Acoso y poder en las entrañas del Estado

No nos engañemos. Lo que hoy desborda los titulares sobre el Ministerio del Interior no es un «fallo en el sistema» ni una serie de «casos aislados».

Hay que entender que el Estado no es un árbitro neutral, sino el garante de un orden: estas denuncias de acoso sexual son la manifestación natural de una estructura jerárquica diseñada para el control y la dominación.

La institución como refugio del agresor

Cuando una mujer denuncia acoso dentro de las fuerzas de seguridad o en las altas esferas de Interior, se enfrenta a un muro de hormigón armado. La crisis actual no es solo por la gravedad de los actos denunciados, sino por la maquinaria de encubrimiento que se activa automáticamente.

La jerarquía como silenciador

En instituciones basadas en la obediencia ciega, el rango se convierte en una licencia para el abuso. El superior no solo tiene poder administrativo, tiene el poder de anular la credibilidad de la subordinada bajo una disci-

plina de cuartel que no admite fisuras.

El pacto de caballeros

Existe una solidaridad de casta entre quienes ostentan el poder. El miedo a «manchar la institución» siempre prevalece sobre la integridad física y psicológica de las trabajadoras.

Justicia heredada del franquismo

No podemos obviar que los protocolos y la cultura interna de Interior beben directamente de una Transición que nunca depuró sus cloacas. Los mecanismos de control actuales son herederos de una justicia que protegía al «hombre de orden» frente a la «mujer descarriada» o la disidente. Es una estructura que sigue viendo el cuerpo de la mujer como un botín de guerra o un objeto de servicio, protegida por una judicatura y una fiscalía que, en su ADN, conservan los tics autoritarios y misóginos de la dictadura.

¿Reformas o Ruptura?

El discurso oficial nos hablará de «nuevos protocolos», «formación en género» y «comisiones de investigación». Pero sabemos que no se puede desinfectar una herida si el



Manifestación 8M, Madrid 1980

cuchillo sigue dentro.

El Ministerio del Interior es el brazo ejecutor del monopolio de la violencia. Pedirle a este sistema que sea «feminista» es una contradicción histórica. El feminismo liberal se conforma con que haya más mujeres en la cúpula; el feminismo revolucionario sabe que una mujer con porra y placa sigue operando dentro de una lógica de opresión que no ha roto con su pasado fascista y que, tarde o temprano, se volverá contra ella o contra sus hermanas de clase. No basta con «modernizar». Hay que dismantlar la cultura del silencio y la jerarquía absoluta que sobrevive desde 1939. La impunidad de hoy es el hijo di-

recto de la amnesia de ayer.

Recordar que cada avance ha sido arrancado, no concedido. La crisis actual es el resultado de mujeres que han decidido que el silencio ya no es una opción, desafiando a un aparato estatal que sigue oliendo a naftalina y a bota militar.

La crisis en Interior no se soluciona con dimisiones cosméticas. Se soluciona cuestionando para qué y quién sirve esa institución que aún guarda los vicios de su fundador espiritual. Mientras el poder siga cimentado en la herencia de la dictadura, el acoso será su herramienta de disciplina.

Silvia Martínez

En el 40 aniversario del referéndum sobre la OTAN



Se cumplen 40 años del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, celebrado el 12 de marzo de 1986.

Tras el golpe del 23-F de 1981, el gobierno de la UCD, presidido por Calvo Sotelo, decidió la entrada de España en la OTAN, en una votación parlamentaria en la que el PSOE y el PCE votaron en contra. La entrada se formalizó el 30 de mayo de 1982, convirtiéndose España en el 16.º miembro de la OTAN el 30 de mayo de 1982. La entrada contó con el rechazo de buena parte de la sociedad y partidos políticos. Al igual que toda la izquierda española, el PSOE se opuso fuertemente al ingreso del país en la alianza, difundiendo carteles con el

La famosa campaña de PSOE para el Referendum OTAN lema «OTAN, de entrada no», y se comprometió, si llegaba al gobierno, a apoyar la salida de la alianza y convocar un referéndum nacional «para salir de la OTAN».

El PSOE ganó las elecciones del 28 de octubre de 1982. Pero Felipe González y su Gobierno anunciaron casi desde el principio un cambio de posición: iban a defender que España siguiera en la OTAN, aunque introduciendo tres condiciones: la no incorporación a la estructura militar, la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares y la reducción de las bases militares norteamericanas en España instaladas desde 1953.

Durante más de tres años, poderosas movilizaciones populares, in-

cluyendo una manifestación en Madrid de más de un millón de personas, exigieron la convocatoria del prometido referéndum. Finalmente, este fue convocado el 31 de enero

Felipe González anunció, a pocos días del referéndum, que dimitiría si ganaba el NO

de 1986.

Pero el PSOE había cambiado su postura. Desde su entrada en el Gobierno y durante la campaña del referéndum defendió el SÍ a la permanencia en la OTAN. A pesar de que en 1979, el 74% de los votantes del PSOE se mostraban en contra de la OTAN (y solo un 7% favorables).

Felipe González anunció, a pocos días del referéndum, que dimitiría si ganaba el NO, y consiguió finalmente remontar las encuestas: el SÍ ganó con el 56,85% de los votos válidos, con una participación del 59,4%. El NO triunfó en cuatro comunidades: Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias.

Pronto no quedó nada de las condiciones incluidas en la pregunta del referéndum. En 1997, con el gobierno de José María Aznar, España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN (incumpliendo la primera para que

Estados Unidos pueda instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español, previa autorización del Gobierno de España).

Y se han mantenido las dos principales bases militares de los EE. UU. en territorio español. Antes de que el gobierno interviniera, cientos de aviones han pasado por Morón en su camino hacia Oriente Próximo para participar en las acciones contra Irán, y varios buques estacionados en Rota también se han desplazado al campo de operaciones militares. Ahora, el gobierno ha decidido prohibir el uso de las bases para tareas de apoyo logístico al ataque contra Irán, una decisión que saludamos. Pero la única manera de defender la soberanía y contribuir a la paz es cerrar las bases.

Hoy, España es un pilar de la OTAN, sus bases son importantes centros de operaciones (Morón para el Afrikom, Rota para el despliegue de misiles). Y la pertenencia a la OTAN nos obliga a aumentar al doble el gasto militar.

Hoy, como hace 40 años, hay que organizar la lucha por la paz, contra el aumento de gastos militares, por la salida de la OTAN y el cierre de las bases yanquis.

Héctor Lagar

94.000 millones de gasto armamentista camuflados

Citas de una intervención del diputado Jordi Salvador

Quiero plantear una cosa muy simple y democrática, que es: basta de presupuestos por la puerta de atrás en tema de armas. [...]

Creemos que en algunas cosas no está siendo coherente el Gobierno que Vd. representa. Vd. ha hablado de refilón de los proyectos que Vd. llama presupuestos especiales de armamento y ascienden a 94.000 millones de euros, que no pasan por el Congreso de los Diputados, como otras cosas de Defensa. [...]

El presupuesto de defensa de 94.000 millones es secuestrar el futuro, como mínimo del gasto social de los próximos años, sin pasar por el Congreso de los Diputados, y eso creo que es grave. Estas cantidades, esos programas han de

pasar por el Congreso. [...]

(Este presupuesto) es central porque condiciona todos los presupuestos de todos los países. Por

ejemplo, han utilizado 18.922 millones para pagar misiles en lugar de rescatar la sanidad pública.

(Nos vemos abocados a que sea una referencia en) un informe de 100 páginas que se reparte 5 días



Jordi Salvador en el Congreso

antes de la votación. Nos enteramos cuando lo trate el Consejo de Ministros. Esto no es transparencia, evita una fiscalización real. Es una constante en el gasto militar. El Congreso aparece como una cámara

de la que se puede prescindir, cuando es la representación directa del pueblo. [...]

¿Cuál es la cifra consolidada de gasto militar y armamentista que no aparece en los presupuestos ordinarios pero pagamos?

¿Cuándo protegerá la ley de financiación de Israel, para tapan las grietas que permiten que compre tecnología a quien comete la masacre y el genocidio.

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arribazalo, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Àngel Tubau.

C/ DESEGAÑO 12, 1ªA 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrero.org
www.informacionobrero.org



COORDINADORA NACIONAL UNITARIA DE LUCHA (CNUL)

14 DE MARZO, JORNADA CONTINENTAL POR EL DERECHO A MIGRAR, LA SOBERANÍA NACIONAL Y EN SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS Y NACIONES OPRIMIDAS, AGREDIDAS HOY POR EL IMPERIALISMO YANQUI.

LMA: PLANTON EN LA DIBANADA DE SE UL, NORIA RODRIGUEZ

REGIONES: EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CADA REGION

El IX Encuentro Nacional de la CNUL, realizado en Lima el 31 de enero, acordó unirse a la realización de la JORNADA CONTINENTAL POR EL DERECHO A MIGRAR, CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI, el sábado 14 de marzo. Recordamos que esta Jornada Continental fue acordada en la conferencia de México a fines de setiembre del año pasado en la que participaron representantes de movimientos sociales, populares y de partidos democráticos y antimperialistas de varios países de nuestro continente.

- Defensa de la soberanía de Venezuela. Libertad para el presidente Maduro y Cilia Flores, secuestrados por el gobierno de Trump.
- Apoyo a los luchas del pueblo norteamericano contra Trump y por que se anule ICE (breve armado de represión contra los migrantes).
- Abajo el falso Plan de Paz en Gaza. Fuera el Sionismo de Palestina.
- Abajo a los bombarderos B-1 en la guerra contra Israel.
- Fuera los soldados yanquis de París, rechazo al plan norteamericano de montar una base militar en el Callao y la Privatización de PETROBRAS para entregarla al capital imperialista.

¡CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI, ENEMIGO PRINCIPAL DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO, FUERA YANQUIS GENOCIDAS DE VENEZUELA, IRAN Y DEL MUNDO!

REINO UNIDO

Declaración de los principales sindicatos británicos que representan a la gran mayoría del movimiento sindical del país

«Condenamos la guerra ilegal contra Irán y el abandono de las negociaciones diplomáticas por parte de Estados Unidos bajo la presión de Israel.

Las informaciones sobre las bajas civiles iraníes, entre las que se incluyen estudiantes y escolares, son especialmente alarmantes y exigen una investigación rápida e independiente.

Nos oponemos a cualquier ataque contra civiles y nos oponemos a cualquier guerra ilegal. Tememos que cualquier ataque contra Irán tenga consecuencias devastadoras a nivel mundial, desde la inestabilidad de toda la región hasta el estallido de los precios del petróleo, que afectará a los trabajadores de todo el mundo.

- Maryam Eslamdoust, de TSSA (sindicato de trabajadores del transporte y el turismo);
- Eddie Dempsey, de RMT (sindicato de ferrocarriles, transporte marítimo y transporte por carretera);
- Fran Heathcote, de PCS (federación de servicios públicos);
- Sarah Wooley, de BFAWU (sindicato de trabajadores de la panadería y la alimentación);
- Paul Fleming, de Equity (sindicato de trabajadores de las artes escénicas);
- Jo Grady, de UCU (sindicato del personal de la enseñanza superior);
- Daniel Kebede, de NEU (enseñanza);
- Steve Wright, de FBU (sindicato de bomberos);

- Brian McDaid, de Aegis (sindicato de personal de servicios financieros);
- Daniel Garnham, de SIF (federación de la industria de la seguridad);
- Steve Gillan, de la POA (personal penitenciario);
- Liz Martin, de la PCU (sindicato de psicoterapeutas);
- Gawain Little, de la GFTU (federación general de sindicatos);
- Zita Holbourne, de JNC (sindicato de artistas);
- Andrea Egan, de Unison (federación del sector público);
- Sharon Graham, de Unite (federación del sector privado);
- Dave Ward, de CWU (sindicato de trabajadores de la comunicación).



«Congreso de Sindicatos»:

organización que agrupa a los sindicatos británicos

«Condenamos la peligrosa escalada de acciones militares provocada por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel este fin de semana, que violan el derecho internacional y comprometen la diplomacia y las perspectivas de paz.

Condenamos las acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos, Israel e Irán, que violan la soberanía de los Estados, matan a civiles —en particular, más de 160 niños iraníes muertos en ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra una escuela, un acto condenado por la Unesco— y arrastran a los países vecinos a un conflicto.

Hacemos un llamamiento a todas las partes para que respeten el derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos, y apoyen a los sindicatos de Oriente Medio en su lucha por la justicia social».



La paz de Trump y Netanyahu es la paz de los cementerios

Mientras se establece el «Consejo de Paz» de Trump en Gaza, el ejército genocida israelí continúa sus operaciones asesinas contra la población civil palestina, que ya no tiene ningún lugar donde refugiarse. El objetivo israelí de llevar a cabo una limpieza étnica en la Franja de Gaza no es nada nuevo. Nadie puede ignorarlo. Ya el 17 de octubre de 2023, el instituto Misgav, un «think tank» israelí cercano a Netanyahu, publicó una nota en la que presentaba la guerra como «una oportunidad única y excepcional para evacuar toda la Franja de Gaza». El documento, que sigue sirviendo de referencia hoy en día en los medios de comunicación israelíes, recomendaba la «reubicación y asentamiento definitivo de toda la población de Gaza», en particular hacia el Sinaí egipcio u otros países, en coordinación con Egipto. El objetivo declarado era vaciar Gaza de sus

habitantes palestinos por razones estratégicas y demográficas, asumiendo el incumplimiento del derecho internacional.

Al considerarse imposible la expulsión de los palestinos de Gaza, los regímenes árabes, aunque totalmente cómplices del encierro de los palestinos, no podían aceptar ser acusados de acompañar una nueva Nakba, por lo que el imperialismo estadounidense desarrolló una nueva forma de control y encierro de la población palestina. Según los proyectos del «Consejo de Paz», se trataría de dividir la Franja de Gaza en varias zonas estancas, en las que los palestinos serían recluidos, concentrados y vigilados mediante medios modernos de identificación y control. Todo ello permitiendo que aquellos que esperaran sobrevivir en otros lugares en condiciones menos adversas pudieran marcharse.

Extractos de un artículo de Orly Noy, periodista residente en Jerusalén, 1 de marzo de 2026

Esta vez, el ataque tenía un objetivo adicional: liberar al pueblo iraní del yugo opresivo de los ayatolá. Porque es bien sabido que una de las funciones principales de Israel en Oriente Medio es llevar la libertad a los pueblos de la región a base de aviones de combate y bombarderos.

De repente, la vida de los iraníes se ha vuelto muy apreciada para los israelíes, hasta tal punto que están dispuestos a pasar largas noches en refugios antiaéreos, sabiendo que sufrirán grandes pérdidas por su parte, a condición de que nuestros pilotos lleven la buena noticia de la libertad, o al menos el asesinato de los líderes iraníes y la destrucción de las infraestructuras e instalaciones nucleares de los Guardianes de la Revolución.

[...] El hombre que, más que ningún otro en la historia de Israel, ha

trabajado sin descanso para enfrentarse a los ciudadanos entre sí, para

incitarlos y enardecerlos, para suscitar un odio sin precedentes entre

ellos; el hombre que es objeto de un orden de detención internacional por crímenes contra la humanidad, ese hombre expresa hoy su preocupación por la unidad del pueblo iraní y su lucha contra la tiranía. Podría ser cómico si no estuvieran en juego tantas vidas. [...]

Pero el discurso de solidaridad se disipó casi tan rápido como había aparecido. Tan pronto como las noticias comenzaron a informar de víctimas civiles, en particular en la escuela primaria de niñas de Minab, donde murieron alrededor de 150 niñas en lo que parece ser un ataque aéreo israelí, la supuesta preocupación por el pueblo iraní resultó ser pura formalidad. [...]

Igualmente deprimente y predecible fue el hecho de que los líderes de la oposición judía se apresuraron a unirse a Netanyahu para apoyar la

guerra. «Quiero recordar a todos que el pueblo de Israel es fuerte. El ejército y la fuerza aérea son poderosos. La

mayor potencia del mundo está de nuestro lado», tuiteó Yair Lapid. «En momentos como este, estamos unidos y ganamos juntos. No hay coalición ni oposición, solo un pueblo y un ejército, al que todos apoyamos». [...]

Nadie entiende mejor este mecanismo que Netanyahu. Por precaria que sea su posición política, sabe que basta con un clic para unir incluso a sus rivales más feroces de todo el espectro sionista. Si «en tiempos de guerra, no hay coalición ni oposición», entonces la guerra perpetua se convierte en su estrategia política más fiable, y ha aprendido a desplegarla cada vez con más frecuencia. [...]



Comunicado, 3 de marzo

Bajo el pretexto del ataque israelí-estadounidense contra Irán, Israel ha impuesto un bloqueo total a los palestinos de Cisjordania, mientras que las milicias de colonos, apoyadas por el ejército, continúan llevando a cabo ataques violentos y organizados contra la población palestina, con el objetivo de extender la limpieza étnica en Cisjordania.

Hoy (lunes), milicias armadas de colonos y fuerzas militares israelíes han llevado a cabo una redada en la

aldea de Qaryut, en el distrito de Nablus, y han matado a dos palestinos, los hermanos Muham-mad 'Azem, de 51 años, y Fahim 'Azem, de 47. Otras tres personas resultaron heridas por disparos, entre ellas un tercer hermano. Testigos presenciales informaron de que el ejército había detenido a más de 20 palestinos en la aldea. Debido al bloqueo impuesto por Israel en Cisjordania, las ambulancias no pudieron acceder a los heridos y evacuarlos durante más de una hora.

En Qusra, en el distrito de Nablus, los colonos invadieron el patio de una casa palestina, después de que el sábado unos colonos agredieron e hirieron en la cabeza a un habitante de la comunidad.

El viernes, los colonos agredieron a activistas israelíes en el pueblo, causándoles heridas que requirieron hospitalización. [...]

(*) B'Tselem: Centro israelí de información para la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados.

Mensaje de Awad AbdelFattah, coordinador de la Campaña por un solo Estado Democrático (ODSC)



Desde la Segunda Guerra Mundial, la humanidad nunca ha conocido una alianza más decadente y sórdida que esta alianza (estadounidense-sionista), que hoy renueva su agresión contra Irán, después de haber supervisado

y dirigido la guerra de exterminio abierta en Gaza y Palestina.

Una alianza sangrienta que no solo mata, sino que se jacta de ello; que no se contenta con imponer el bloqueo, sino que lo convierte en una

política permanente; que no se limita a disfrutar de la impunidad, sino que la erige en principio fundamental del orden internacional. Ante este desen-

Regímenes que se alían con el agresor, otros que observan las masacres en un silencio vergonzoso o en una complicidad abierta.

cadena bárbara, los regímenes árabes se desvelan tal y como son: regímenes sin soberanía, sin voluntad y sin dignidad. Lo que está ocurriendo no es una simple escalada militar, sino un intento de remodelar la región con fuego y sangre, de imponer la ley de la fuerza bruta en sustitución de la ley y la justicia.

Todo silencio oficial es complicidad, toda justificación es participación en el crimen y toda supuesta neutralidad es tomar partido por el verdugo».

LA ESENCIA DEL IMPERIALISMO: LA GUERRA



Manifestación contra la intervención en Irán, Nueva York

El 7 de octubre de 2023 se abrió una nueva etapa del intento de liquidación del pueblo palestino, obstáculo central del intento de reordenar todo el Medio Oriente en torno a Israel, vasallo principal del imperialismo norteamericano en la región.

Hoy el genocidio sigue, acrecentado por la limpieza étnica en Cisjordania

Hoy el genocidio sigue, acrecentado por la limpieza étnica en Cisjordania. Pero la resistencia del pueblo palestino, entre otras cuestiones, muestra que este «reordenamiento» es una quimera.

Tienen que ir más lejos y más fuerte: la guerra abierta contra la nación iraní iniciada el 1 de marzo, y de nuevo la invasión del Líbano confirman que el imperialismo no puede abrir ninguna salida de estabilización ni de

paz. Necesita la guerra como único recurso real de que dispone.

La misma política para todos los continentes

Hace solo unos meses Trump desenterraba o actualizaba la Doctrina Monroe, intervenía militarmente en Venezuela para someter a todo el país, raptando a Maduro y Celia, y poner su gobierno bajo tutela. Después aislaba aún más a Cuba y amenazaba con intervenir. Un mensaje para todo el continente y, en particular, contra la población norteamericana, empezando por la población inmigrante, que es casi mayoritaria en múltiples estados del país, como California. Trump solo tiene una política: la amenaza, la agresión, la invasión...

Sería largo citar todos los escenarios abiertos simultáneamente en todos

los continentes. Pero en lo que nos concierne más directamente, Europa. Cuando la mayoría de la población, tanto rusa como ucraniana, solo aspira a la paz, los Gobiernos europeos reunidos hace quince días en Múnich aceptan el dictado de Trump: 90.000 millones más para la guerra. Guerra que se inició por responsabilidad de Putin y la OTAN y que ahora solo sirve a las oligarquías de estos dos países y a los intereses económicos de los Estados Unidos.

Los Gobiernos europeos, incapaces de defender los intereses de sus propias burguesías, solo tienen una política: aceptar el chantaje de Trump. Incluso ante la agresión contra Irán, nadie les consultó y sin embargo acudieron a «ayudar» a Trump. Y a aceptar, como hizo patéticamente el canciller Mertz, los ataques a Sánchez por

parte de Trump, constatando que las instituciones europeas, la Unión Europea solo son instrumentos sometidos al imperialismo y contrarios a los intereses de los pueblos y naciones europeas.

Una guerra a todos los niveles

Decía el general prusiano Carl Von Clausewitz que «la guerra es la continuidad de la política por otros medios», premisa que se cumple en las condiciones actuales de la descomposición del sistema de producción capitalista.

Trump es muy consciente de que en los 14 meses transcurridos de mandato ni ha industrializado el país, ni vencido la inflación, ni beneficiado de los aranceles... De hecho la población ha pagado el 90% del costo de ellos; el 50% de la población está en el umbral de pobreza y su popularidad está en mínimos, como demuestran las sucesivas elecciones parciales y la quiebra de las instituciones.

Y, enfrentado a una competencia creciente en el mercado mundial, busca con la guerra hacer frente a China o a los cobardes competidores europeos. Recordemos que el 90% de las exportaciones del petróleo iraní y el 80% del venezolano iban para China. La guerra al servicio entre otras cosas de la guerra comercial.

No se trata ni de democracia ni de paz

La caída de la URSS en 1990/91 quebró el orden de 1945 y, con ello, el llamado «derecho internacional». Desde entonces y con la primera intervención contra Iraq en 1991, este derecho fue crecientemente vulnerado hasta llegar al límite actual, cuando nuestros «demócratas» niegan incluso el «derecho a defenderse» (artículo 51 de la Carta de la ONU).

Lo más patético es que en los países europeos los Gobiernos responden aumentando los gastos militares y ello en detrimento del «estado del bienestar». Incluso en España, donde el Gobierno ha relanzado el «No a la

Guerra», quizás olvidando la carga que ello conlleva, se han triplicado desde 2015 estos gastos.

La única salida es la revuelta de los pueblos

Sería ilusorio pensar que ante la fuerza militar del imperialismo la resistencia armada puede abrir una salida. Sin dejar de contemplarla, no hay que olvidar que el elemento esencial de la derrota del imperialismo en Vietnam fue la masiva oposición de la población norteamericana.

Hoy el 75% de esta población está en contra de la agresión a Irán. Este sábado 7 de marzo hay manifestaciones en todas las ciudades de los Estados Unidos. Manifestaciones organizadas por una amplia coalición de fuerzas políticas, sindicales y populares. Bueno es de saber que una delegación representativa de estas fuerzas estará en el Mitin de Londres contra la Guerra el 20 de junio.

Al tiempo que crece la marcha a la guerra y al autoritarismo, crece la resistencia. Las fuerzas están en todos los países. Fuerzas que unen la lucha contra la guerra a la defensa de los derechos sociales, los servicios públicos y los derechos nacionales y democráticos.

En nuestro país, el mitin de Londres está respaldado por PODEMOS, por diputados republicanos, militantes de todos los partidos de izquierda, centenas de sindicalistas y de asociaciones populares, plataformas de pensionistas. Es una fuerza que se constituye retomando el «No a la Guerra» de 2003, que abrió el camino a la derrota electoral de Aznar el 14 de marzo de 2004.

La historia no se repite hoy. Hoy son aún mayores los motivos para alimentar esta resistencia, desarrollándose en una verdadera coordinación internacional que tendrá en Londres su próxima etapa, que se prepara mediante el combate cotidiano en todos sus aspectos.

A.T. 5 /03/26

¿Cómo impacta a Venezuela el alza del precio del petróleo tras el bombardeo a Irán?

Difunde: Comité autónomo e independiente de trabajadores(las) caít 4-3-2026

El precio del petróleo se disparó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el ataque iraní a una refinería en Arabia Saudita incrementan la tensión. El precio del petróleo subió; algunos analistas predicen que pronto podría superar los 100 dólares el barril. El petróleo venezolano está bajo control estadounidense, y los 40 millones de barriles que quedan por vender se comercializarán a precios elevados.

El retraso involuntario en la comercialización de 40 millones de barriles de petróleo venezolano ha derivado en un beneficio para el país: el crudo que no se vendió la semana pasada comenzará a ingresar al mercado a partir de este lunes con un precio que podría duplicar el estimado inicial (de 50 a casi 100 dólares por barril) debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

La paradoja radica en que la determinación de cuándo y a qué precio se realiza la venta permanece exclusivamente en manos de Estados Unidos, y la falta de transparencia en el mecanismo, sin una supervisión bilateral con-

fiable, permite la posibilidad de fricciones entre los nuevos socios impuestos por la fuerza con la agresión militar.

Había una vez 80 millones de barriles de crudo venezolano que pasaron a control de Estados Unidos tras el bloqueo naval iniciado en diciembre de 2025. De ellos, 40 millones ya se vendieron. Fue el jueves 26 de febrero cuando el secretario de Energía, Chris Wright (desde Corpus Cristie), confirmó la operación: 2.000 millones de dólares a un precio promedio de 50 dólares por barril. Los otros 40 millones, dijo Wright, aún estaban «en proceso de venta».

Durante el fin de semana, EE.UU. e Israel atacaron Irán y paralizaron de facto el tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. El Brent cerró el viernes en 72,87 dólares, pero las proyecciones para la apertura de los mercados de este lunes lo sitúan entre 90 y 100 dólares. Para Venezuela, la cuenta es simple: si los 40 millones de barriles pendientes se venden a 90 dólares, ingresarán 3.600 millones. 1.600 millones más que a 50. Si el precio toca los 100, la cifra ascenderá a 4.000 millones.



Sin embargo, el beneficio choca contra un problema de fondo. El control de las ventas es exclusivamente estadounidense: el Departamento de Energía y el Tesoro deciden el momento de la venta de cada cargamento. El gobierno de Delcy Rodríguez (presidenta encargada) no tiene acceso en tiempo real a las negociaciones ni a los

precios de cierre.

Los fondos, depositados en cuentas del Tesoro de EE.UU. bajo la Orden Ejecutiva 14.373, están blindados frente a los acreedores internacionales, pero también inaccesibles para cualquier supervisión bilateral. PDVSA ya no controla ni sus exportaciones, ni sus ingresos. Es un rehén del invasor.

Es fundamental que los trabajadores que hoy exigimos la recuperación de los salarios conectemos nuestras demandas con la denuncia del control estadounidense sobre los ingresos petroleros. Debemos reclamar la finalización de la gestión de custodia de estos recursos por parte del Gobierno de Trump.

Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE A NOMBRE DE MANUEL CUSO - LA CAIXA E53 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 €

12 NÚMEROS: 18 €

24 NÚMEROS: 36 €

PDF, 24 NÚMEROS: 15 €



www.informacionobrero.org